CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Sesiones informativas de Comisiones

Acta taquigráfica de la sesión celebrada por la

COMISION DE ADMINISTRACION TERRITORIAL

**el martes, 19 de junio de 1979, con asistencia del
señor Ministro (Fontán Pérez)**

Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Está con nosotros el Ministro de Administración Territorial. Yo creo que es inútil subrayar la importancia de esta sesión informativa. La Cámara tiene la función de legislar y también la función de controlar la acción de Gobierno. Los señores Diputados, la Cámara en general, tienen el derecho de interpelar y de preguntar, y el Gobierno la obligación de informar.

Hoy estamos aquí precisamente, a través de esta actitud del Gobierno —en este caso del Ministro de Administración Territorial—, para informar sobre la política de su Departamento para que la Cámara tenga —en este caso la Comisión de Administración Territorial— todos los elementos de juicio para, en su caso, poder plantear, desde los ámbitos legislativo y de control que le corresponden, toda una serie de acciones sobre la base precisamente de una información de calidad. Esa información es la que hoy nos va a dar el Ministro, sin perjuicio de que durante el receso, después de la intervención del Ministro, podamos mantener con los Portavoces de los Grupos Parlamentarios una conversación sobre la manera de enfocar el tema.

En principio, yo sugeriría que, si les parece bien a SS. SS., después de la exposición del Ministro, lo que podríamos hacer es dar un tiempo equis para que se formulen preguntas por escrito, de tal manera que el Ministro con la Mesa las ordenaría, las clasificaría y se podría dar respuesta a continuación a esas preguntas.

A continuación, podríamos dar un turno de Portavoces para que hicieran las oportunas matizaciones o las oportunas réplicas a la intervención del Ministro.

Digo que esto es un avance de lo que en principio me parece una mecánica que no es mala, pero que podríamos, a la vista del cúmulo de preguntas o a la vista de la propia dinámica del

acto, mantener con los Portavoces, en el momento del receso, unas conversaciones sobre si interesa aducir algún tipo de mecánica distinta a la que acabo de exponer.

Entonces, el señor Ministro de Administración Territorial tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Fontán Pérez): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, he aceptado con mucho gusto la invitación que me formuló el Presidente de la Comisión de Administración Territorial para acudir ante la Comisión a esta sesión informativa y debate subsiguiente.

Por una parte, la he aceptado; por otra parte, la agradezco, porque ofrece una primera oportunidad de presentar delante de un órgano del Parlamento algunos de los puntos sobre los que versa actualmente la actividad, las inquietudes y la voluntad política de este nuevo Departamento de Administración Territorial, acerca del cual yo empezaría con una definición que arranca del Real Decreto de 4 de abril de 1979, que crea el Departamento.

Realmente, se crea el Departamento de Administración Territorial y no se crean en la práctica órganos nuevos de la Administración del Estado, en el sentido de que el Ministerio de Administración Territorial recoge del antiguo Ministerio del Interior, la Dirección General de Administración Local, con todas las competencias que esta Dirección General tenía; recoge, igualmente, el Organismo Autónomo Instituto de Estudios de Administración Local y, al mismo tiempo, se estructuran, de una manera organizada, Servicios que estaban ya incoados en los organismos o entes de apoyo del anterior Ministro Adjunto para las Regiones en lo que se refiere a los regímenes preautonómicos y a las futuras Comunidades Autónomas.

El esquema organizativo del Ministerio no puede ser más simple: una Subsecretaría que re-

coge las funciones de subsecretaría desde el punto de vista técnico, administrativo y político, las funciones de subsecretaría que tenía la del Ministerio del Interior y las funciones de subsecretaría que, con respecto a estos órganos de apoyo del Ministro Adjunto para las Regiones, venía desempeñando el Ministro de la Presidencia del Gobierno; una Secretaría General Técnica y dos Direcciones Generales: la Dirección de Administración Local, que se recibe tal como estaba, y la nueva Dirección General de Cooperación con los Regímenes Autonómicos, que se ocupa en el momento actual de las relaciones con los órganos de Gobierno y con las distintas estructuras de los actuales regímenes preautonómicos, que, en su día, está llamada a tener una relación análoga —no exactamente la misma, porque constitucionalmente la situación sería distinta—; una posición análoga en relación con las Comunidades Autónomas.

Este Ministerio no es un Ministerio de gestión, éste no es un Ministerio inversor; éste es un Ministerio de tramitación y éste es un Ministerio al que corresponde indudablemente velar y aplicar la política conducente a la puesta en práctica de aspectos sustanciales, no de todos ellos, por supuesto, y no de los más importantes del Título VIII de la Constitución.

Quiero decir que este Ministerio, por una parte, como digo, con sus competencias en relación con la Administración Local, con sus competencias en relación con la Administración preautonómica y luego, en el futuro, con la Administración Autónoma, tiene las funciones que tiene y no tiene las competencias o funciones que no tiene; es decir, que a este Ministerio de ninguna manera le corresponde invadir campos de actividad política sustanciales, que incluso no son propios del Gobierno, sino que corresponden al Parlamento. Con esto me estoy refiriendo a los Estatutos de Autonomía de las diversas Comunidades Autónomas que en estos momentos están de alguna manera previstas con el sistema de regímenes preautonómicos y que en el futuro puedan desarrollarse.

Entonces, en relación con la estructura de este Ministerio, voy a hablar de lo que hacemos y de los proyectos que tenemos, así como del estado en que se encuentran estos proyectos.

Un problema, una temática, diría, en términos más generales, más sustancial que con la que se tiene que enfrentar día a día el Ministerio de Ad-

ministración Territorial, es toda la que corresponde a la Administración Local. En este punto el Ministerio, igual que el Parlamento, igual que los partidos políticos, se encuentra en estos momentos con la realidad legal de una verdadera fronda legislativa, de diversos escalones y normas de diversa jerarquía que afectan a la Administración Local. Parte de esta normativa funcional tiene una historia muy larga que es la de todas las organizaciones, todos los sistemas organizativos y los sistemas legales de régimen local que en nuestro país tienen, como digo, un largo proceso de casi setenta años.

Por otra parte, este mismo Parlamento, mejor dicho, este Parlamento en la legislatura anterior, adoptó algunas disposiciones a nivel de ley en relación con la Administración Local, con el régimen local.

Saben todos ustedes que la Ley de Elecciones Locales, aprobada mayoritariamente por este Parlamento y, en muchos de sus artículos, yo diría casi unánimemente, en parte de su contenido desborda el carácter técnico que podía tener una mera ley electoral, para entrar en materias sustantivas de organización de los propios entes a los que afecta, no solamente a los Ayuntamientos, sino también a las Diputaciones e, incluso, abordando situaciones nuevas, como sería el caso particular del Consejo General Interinsular de las islas Baleares, la creación de los Consejos Insulares en las mismas islas Baleares y algunas otras modalidades de organización local a las que el Parlamento dio forma y creó por esta vía de la Ley de Elecciones Locales.

En este sentido he de decir que el Ministerio se ocupa actualmente de una manera, me atrevería a decir prioritaria, de la preparación de lo que ha de ser el proyecto de Ley de Régimen Local que ha de presentarse, tal como ha sido anunciado en el Pleno de esta Cámara, que ha de presentarse al Consejo de Ministros para su aprobación e inmediato envío al Congreso de los Diputados en la primera quincena de octubre.

Entonces, en un primer momento me voy a detener en algunos de los principios constitucionales y de los principios orgánicos acerca de los cuales, a mi modo de ver, puedo anunciar que estos principios tratarán de estar traducidos y reflejados en la Ley de Régimen Local, algunos de ellos por imperativo constitucional. Pero esos que estarán en la Ley de Régimen Local por imperativo constitucional son realmente un man-

dato que el Ministerio recibe de la propia Constitución y es un mandato que nos concierne a todos, Gobierno y Parlamento, porque es un mandato que, a partir de la aprobación de la Constitución en el referéndum y la posterior sanción de dicha norma suprema de la convivencia política española, es un mandato que nos concierne a todos en su ejecución.

Yo señalaría que, de los puntos constitucionales que han de inspirar el proyecto de Ley de Régimen Local, algunos de ellos son tan evidentes y tan claros en la propia literalidad del texto de la Constitución que bastará su enunciado, sin hacer demasiado prolija la referencia a los distintos artículos.

El primer punto es que la Constitución establece la autonomía municipal y la autonomía provincial en el mismo título de la Constitución en que se ocupa de los otros niveles de la autonomía, es decir, el principio de la autonomía municipal, en todos los sentidos que puede implicar esta palabra: el autogobierno de las corporaciones municipales, de las corporaciones locales, la autonomía financiera de las agrupaciones locales —sobre eso hablaré luego con alguna matización— y la capacidad de que estas corporaciones locales se gobiernen a sí mismas y se dicten a sí mismas las normas de su funcionamiento.

De igual manera el tema de la autonomía provincial, entendida la provincia como agrupación de municipios, que está en el artículo 141, 2, de tal forma que las corporaciones municipales y las corporaciones provinciales están constitucionalizadas en nuestra suprema norma política.

Ha de tener en cuenta la Ley de Régimen Local otras agrupaciones de municipios que son posibles según el texto constitucional. De estas agrupaciones de municipios, unas tendrán un carácter consolidado mediante la agrupación de municipios que tengan servicios comunes, y otras pueden tener un carácter sectorial, es decir, que se admiten las agrupaciones de municipios para determinadas funciones concretas.

Los Cabildos o Consejos Insulares son unas corporaciones que participan, yo diría, casi más del carácter de las diputaciones en cuanto que comprenden agrupaciones de municipios, pero tienen otra serie de peculiaridades que han de ser enmarcadas dentro de la Ley de Régimen Local.

Las Haciendas locales han de estar nutridas, según la legislación fiscal vigente, por los tribu-

tos propios de los Ayuntamientos y las Diputaciones, es decir, de las corporaciones —hablo de las corporaciones en general para no tener que ir detallando Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos—, y por otros tributos propios de las municipalidades, que en parte son tributos cedidos por el Estado en la reforma fiscal y en parte los tributos que puedan crear las propias corporaciones, y por la participación en los tributos del Estado y en los tributos que correspondan a las declaradas comunidades autónomas.

Como vamos a tener la Ley de Régimen Local con una vocación de permanencia, es evidente que en el capítulo de la participación en los tributos del Estado y en los tributos de las Comunidades Autónomas la ley no debe descender a detalles de porcentajes, de puntos, que les corresponderán a las Haciendas locales en cada uno de estos tributos, cosa que es más propia de una legislación más coyuntural o más transitoria de lo que queremos que sea la Ley de Régimen Local, si se han de recoger los principios.

Después, las funciones de la Administración del Estado en relación con las corporaciones locales. Dentro del espíritu de la autonomía, estas funciones de la Administración del Estado en relación con las comunidades locales han de ser entendidas más como funciones de asistencia y de apoyo que como funciones de fiscalización o de tutela. Es uno de los cambios —digamos— de mentalidad política con que desde la Administración Central del Estado hay que abordar el tema de las distintas administraciones que sirven a los ciudadanos. En este sentido, la Ley de Régimen Local irá precedida —antes de que este proyecto llegue a manos del Parlamento y pueda tomar en él su forma definitiva— de una escalonada serie de medidas que están preparadas por el Ministerio de Administración Territorial, algunas de ellas en avanzado curso de aprobación, en relación con la supresión de una gran parte de los mecanismos de fiscalización, intervención y tutela que la Administración Central tiene en relación con las corporaciones de carácter local.

En la nueva Ley se ha de contemplar la estructura y organización de los Ayuntamientos que hoy por hoy están gobernados por los preceptos todavía vigentes en la fronda de la legislación de régimen local, de la que hemos tratado de ofrecer en las carpetas que se han entregado a los señores Diputados una especie de resumen puesto al día, y por la Ley de Elecciones Loca-

les, así como por el Decreto 399/78. Pero es evidente que dentro de esta estructura estará en los Ayuntamientos la figura del Alcalde, las funciones de los Concejales y de ese órgano intermedio entre el Alcalde y los Concejales que es la Comisión Permanente, así como las vías que se abren para la participación de las juntas, y las características que ha de tener la presencia de las juntas de vecinos en los distintos niveles de la Administración Local.

Lo mismo diría en relación con las Diputaciones y Cabildos, y con otros dos puntos muy importantes: la función pública local y la audiencia de los ciudadanos y su acceso a la Administración; dos puntos que están recogidos en los artículos 103 y 105 de la Constitución.

Es evidente la importancia de la función pública local, que en estos momentos abarca, probablemente, a un conjunto de unos 250.000 funcionarios, de unos niveles o de otros, y que, por una parte, comprende funciones muy técnicas y, por otra, funciones que no tienen este carácter. Es decir, como fuerza de empleo, y de empleo administrativo, el conjunto de la Administración local constituye una de las grandes magnitudes de la vida pública española.

Pretenderá esta Ley, por una parte, asegurar el rigor técnico de los funcionarios de la Administración local, así como las debidas garantías de consolidación y de permanencia en el empleo, y, al mismo tiempo, de promoción. Vamos a contemplar en esta Ley una cierta agilidad en las transiciones de unos cuerpos a otros y, por otra parte, pretendemos abrir una puerta para que las corporaciones locales tengan una palabra que decir (una palabra que resulte —digamos— decisiva sin merma de los derechos legítimos de los funcionarios), una palabra decisiva que decida cada una de las Corporaciones Locales en la selección de los funcionarios, y pienso en los funcionarios del más alto nivel técnico.

La audiencia de los ciudadanos y el acceso de éstos a la Administración es algo particularmente importante en relación con el régimen local, que es donde el ciudadano se enfrenta con la Administración, envuelto en las preocupaciones y en las aspiraciones de sus problemas cotidianos.

Al mismo tiempo, en el orden de las entidades que han de ser contempladas en la Ley de Régimen Local, hay unas cuestiones a las que yo atribuyo una cierta importancia y que de mane-

ra provisional yo me atrevería a llamar (no es un nombre técnico; en la Ley no se empleará, por supuesto, ese nombre) las entidades submunicipales y las entidades supramunicipales.

El tema de las entidades submunicipales (como digo no se trata de un nombre técnico y no aparecerá como tal en la Ley) es el que en las ciudades de cierto volumen de población y, sobre todo, en las grandes ciudades, tiene la realidad sociológica y humana de los distritos o de los barrios.

Evidentemente, es necesario que se abra con la Ley un cauce para que los vecinos de los distritos y de los barrios no estén sometidos; las necesidades de estos distritos y barrios no estén sometidos —digo— a un gobierno excesivamente centralizado por parte de las corporaciones municipales. No digo que el sistema de la autonomía alcance a estos niveles urbanos, pero sí insisto en que, desde el punto de vista social humano y de la vida cotidiana, los distritos o los barrios han de tener una personalidad reconocida y unos instrumentos de representación o de cuasi representación y de cuasi gobierno.

Esto en cuanto al entorno urbano. Pero en el entorno no urbano, que abarca una serie tan extensa del territorio nacional, están las entidades locales menores.

Yo creo personalmente (y trataré de llevar este criterio, en la medida en que sea posible, a la Ley) que las entidades locales menores, las que fueron o están a punto de dejar de ser municipios propios por razón de la despoblación relativa o absoluta que se pueda experimentar, y por la imposibilidad técnica de constituir servicios, no deben desaparecer como realidad social, humana y política. Es más, yo diría que, de alguna manera, han de ser protegidas, porque constituyen una parte de nuestro patrimonio histórico y sociológico.

Igualmente, las que podríamos llamar entidades supramunicipales. Por una parte, las municipalidades comarcales resultantes de las agrupaciones de municipios. En los estudios técnicos que operan en nuestro poder en relación con este proyecto de ley se apuntan dos fórmulas de solución: una de ellas es la de las agrupaciones voluntarias de municipios —en la que todos los técnicos están de acuerdo y que requerirá determinados condicionamientos— que de hecho se están produciendo de dos maneras: o bien mediante la transformación de algunos de los que

fueron municipios en entidades locales menores o mediante la constitución de servicios comunes, incluso administrativos, en las municipalidades comarcales, cosa que está dando bastante buen resultado según nuestra experiencia.

Pero se ha estudiado, se ha considerado también, si sería oportuno que la ley abriera paso para una agrupación forzosa de municipios en determinadas condiciones de población y en determinadas condiciones de estructura urbana, humana y sociológica.

Yo puedo adelantar, a título de criterio exclusivamente personal (al final será el Parlamento quien tenga la última palabra), que yo, en principio, no soy partidario de las agrupaciones forzosas de municipios. Sí soy partidario de que por medio de sus recursos la Administración del Estado (y entiendo que el Estado no es sólo Administración central, sino que el Estado son también los otros poderes: comunidades autónomas, diputaciones provinciales, etc.) estimule, desde los poderes del Estado, las agrupaciones voluntarias de municipios.

Otro de los puntos es el referente a las municipalidades metropolitanas. Esta es una cuestión que se plantea como una cuestión práctica de primer orden, en lo que, con este barbarismo importado del inglés, se pueden llamar las grandes conurbaciones; grandes conurbaciones que ya de hecho existen en las metrópolis, en las grandes ciudades de Madrid y Barcelona, pero que también existen en Bilbao, Valencia, Sevilla, etc. Evidentemente, estas municipalidades metropolitanas tienen que tener una especie de acogida en la ley, sin pérdida de la personalidad y de la autonomía política y administrativa de los municipios que formen parte de ellas.

Las fórmulas que están en consideración son varias, pero es evidente que a ninguna corporación de una gran ciudad se le pueden plantear problemas como los del transporte o los de las escuelas, o los problemas de los espacios verdes y otros muchos que no es cuestión de enumerar ahora, sin que dentro de la misma ordenación, con un criterio homogéneo, estén comprendidas otras entidades municipales ajenas a la gran ciudad.

Por último, están las mancomunidades municipales, sobre lo que hay una mayor tradición en nuestra legislación, incluso una mayor experiencia.

Yo no voy a entrar en los detalles, pero es ob-

via la complejidad del tema de las Diputaciones como corporaciones locales, bajo este concepto que resulta, yo diría, novedoso en nuestra concepción política y que es muy importante, a mi modo de ver, en la Constitución, que es la concepción de la provincia como agrupación de municipios con sus consiguientes repercusiones sobre la Diputación como órgano de gobierno de una agrupación de municipios.

Evidentemente, recogiendo toda la realidad política y toda la realidad histórica de nuestro país, habrá unas diputaciones de régimen común, que serán la mayor parte de ellas en cuantía puramente numérica; existirá también el problema de los Cabildos y Consejos insulares con las organizaciones interinsulares (que en un caso tienen un carácter político, como evidentemente tiene ya el Consejo General Interinsular de Baleares y como está llamada a tener la Junta de Canarias, pero independientemente de eso hay unas mancomunidades de Cabildos en las islas Canarias que algunas funciones de servicio público van a tener); y luego estarán las diputaciones de régimen especial, de régimen histórico, las diputaciones forales que tienen una legislación propia, que es propósito de los principios que inspiran la ley mantener en todo caso.

Al hablar de las finanzas municipales y de la autonomía financiera, yo sí querría brevemente señalar unas cuantas cosas. En primer lugar, los impuestos propios o cedidos que serán contemplados en el último de los libros de la Ley de Régimen Local, que tratará de las haciendas locales y que estará a su vez coordinado con el proyecto de ley de financiación de las comunidades autónomas, de próxima entrada en esta Cámara. Hay una relación de interdependencia entre los dos proyectos y en buena parte ambos han sido elaborados con asistencias técnicas análogas. Hablo de los impuestos propios y de la base impositiva.

Si queremos ir a tener de verdad una autonomía municipal o una autonomía de las corporaciones locales, entonces es preciso que haya una autonomía financiera de estas corporaciones, lo que no quiere decir que los ayuntamientos por sí solos, en el capítulo de los ingresos, deban recaabar la totalidad de los ingresos que van a nutrir su presupuesto; esto es obvio, porque los municipios ya tienen, en una pequeña medida, una participación en los impuestos del Estado, que es, por otra parte, una forma de redistribución, aunque sea elemental y mínima, con la que se

puede proyectar el principio de solidaridad que tanto reitera nuestra Constitución.

Ahora, si quiere decir que han de tener una autonomía en el gasto, autonomía en el gasto con todos los controles que implica el carácter representativo de la propia corporación municipal, con el control del gasto que representa la publicidad de los presupuestos y la publicidad del propio gasto, y con el control del gasto que representa, en última instancia, la acción del Tribunal de Cuentas, cuya organización depende de este Parlamento; Tribunal de Cuentas que será, en definitiva, el que acabe ejerciendo de alguna manera el control final de la ejecución de los presupuestos.

Pero es absolutamente evidente, al mismo tiempo, que hay una clara insuficiencia en la dotación de los capítulos de ingresos de las corporaciones locales, acerca de lo cual me voy a extender con permiso de SS. SS. unos minutos. Yo diría que esta situación crítica de las haciendas locales viene determinada por un doble proceso; uno, de tipo social, y otro, de tipo económico. El proceso de tipo social es la constante presión de una mayor demanda de servicios que por parte de la población se ejerce sobre todas las corporaciones de carácter público. De tipo social también es el resultado, las consecuencias de un movimiento de emigración, de una serie de movimientos y migraciones interiores con cambios de población, con la redistribución de la población en nuestro país que ha tenido un carácter por una parte esporádico y por otra anárquico, que ha dado como resultado una nueva distribución del mapa de población en nuestro país.

Pero al mismo tiempo, en el período del último quinquenio, se han producido dos procesos de tipo económico. Uno de éstos ha sido el proceso de inflación, que ha determinado que al cabo de cinco años unos ingresos municipales procedentes —me refiero a los ingresos directos— de unos impuestos cuyo cálculo, tanto de la base impositiva como del volumen del impuesto que sobre esa base impositiva se produce, ha estado rígidamente cristalizado, mientras que, efectivamente, se producía una inflación que deterioraba el valor de esos ingresos en casi un 50 por ciento. Al mismo tiempo se ha ido produciendo, como era inevitable en estas condiciones económicas generales, un encarecimiento progresivo de los costos de personal y de conservación de los municipios, de tal manera que el 75 por

ciento a nivel global nacional de los gastos de los municipios está destinado (hablo, por ejemplo, del año 1978) a gastos de personal y de conservación; quedando, por tanto, enormemente mermaidas, y en muchos casos reducidas a la nada, las posibilidades de gastos de inversión, hasta tal punto que la mayor parte de los municipios no han podido afrontar los programas de urbanismo de carácter obligatorio y algunos, como los grandes municipios de Madrid y Barcelona, con objeto de abordar esos programas de urbanismo, han tenido que acudir a la emisión de deuda, acudiendo, por tanto, al empréstito directo, y algún otro municipio a la venta de una parte de sus activos.

Yo diría, además, que todo ese proceso ha ido acompañado de una debilitación efectiva de aspectos de la gestión municipal; lo cual se ha proyectado, sobre todo, más que en el orden de los impuestos, en el orden de las tasas.

En los balances o estados de cuentas de los Ayuntamientos, de los que tenemos constancia, aparecen unas partidas de deudores por tasas o por impuestos que, realmente, son unos deudores de muy difícil, por no decir utópica o imposible, ejecución. Esto da lugar a que, a partir del año 1975, se produzcan situaciones críticas, cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días, y a las que yo diría que, en cierto modo, no se ha dado nunca una respuesta global, una respuesta profunda, quizá porque no se estaba en condiciones de hacerlo con la estructura municipal y con la distorsión política que representaban unas determinadas estructuras políticas municipales y provinciales heredadas, frente a unas estructuras políticas de Estado, de Parlamento, de representación nacional, que tenían el carácter democrático de las nuestras.

Referente a estos que se han llamado presupuestos de liquidación de deudas municipales, el Presidente de una de las grandes corporaciones municipales españolas me decía irónicamente que él los calificaría más de presupuestos de conocimiento de deudas, que de presupuesto de liquidación de deudas, punto en el que, aunque se trate de un economista y yo no lo sea, no estoy estrictamente de acuerdo con él, por razones que no hacen al caso el detenernos ahora en una digresión.

Primero, el Ayuntamiento de Barcelona se dota de un presupuesto extraordinario de más de 10.000 millones de pesetas para la liquidación

de deudas y la cobertura del presupuesto de urbanismo correspondiente al ejercicio de 1974. Después viene el Real Decreto-ley de junio de 1976, que contempla los casos de los llamados «siete grandes», de los siete ayuntamientos de mayor población de España, y que los dota de un crédito de 5.000 millones de pesetas. En el año 1977 hay, primero, una operación de crédito de este mismo carácter de 22.000 millones de pesetas que, más tarde, en el año 1978 es ampliada a 28.000 millones de pesetas. Se autoriza a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona a incluir en dicha operación los déficits que habían tenido en la explotación de los transportes urbanos que estaban a su cargo. De todas maneras, tenemos que las actividades inversoras en relación con el urbanismo quedan sumamente limitadas, cuando no totalmente frenadas, en sus posibilidades de realización por los ayuntamientos.

Se arbitran unas fórmulas para acudir no al Banco de Crédito Local, sino al crédito, por ejemplo, con otros sistemas de ahorro, como podrían ser los de las Cajas de Ahorros. Realmente, los resultados no han sido para entusiasmar a nadie, porque ocurre, primero, que se ha acudido a ellas en pocas ocasiones; segundo, que se trata probablemente de un dinero caro, y, en último término, que son créditos, digamos, que no van acompañados de la secreta esperanza que los gestores de las finanzas municipales tienen de que, al fin y al cabo, algún día los endeudamientos con el Banco de Crédito Local acaben, de una manera u otra, siendo asumidos por el Estado.

De hecho, ya en este año 1979 hay una partida de 7.000 millones de pesetas destinada a enjugar intereses y amortizaciones en relación con esos presupuestos especiales de liquidación de deudas; cantidad que, probablemente, yo me atrevería a decir que no alcanza de una manera suficiente al conjunto de deudas. Porque deudas son las cantidades que se deben y que están vencidas, y deudas no son el crédito que se tenga a plazos mayores poseyendo unos activos cuantiosos como tienen las corporaciones municipales, nuestras ciudades y nuestros pueblos, que probablemente no alcanzarán, puesto que nuestras previsiones son que el conjunto de anualidades, de amortizaciones y de intereses en el año 79 son algo superiores a los 7.000 millones de pesetas.

Por fin, el Decreto-ley de 26 de enero de este año 1979 permite autorizar a concertar operaciones de crédito con el Banco de Crédito Local de España hasta otros 23.000 millones de pesetas. Estos 23.000 millones de pesetas prácticamente han sido ya distribuidos por el Banco de Crédito Local, y se puede decir que en su conjunto cubren hasta el 37,6 por ciento de los problemas pendientes. De ahí se daban, digamos, las insistentes peticiones por parte de las corporaciones municipales con un ensanchamiento de los techos o de las dotaciones del Banco de Crédito Local de España, con posible destino a créditos a las corporaciones municipales.

Hay que tener en cuenta que los presupuestos de liquidación de deudas de los Ayuntamientos, a diciembre de 1979, en el conjunto nacional, pareció, en algún momento, que alcanzaban la cifra de 61.000 millones de pesetas, y después de la intervención de las delegaciones de Hacienda, las cifras ya conformadas por dichas delegaciones son 58.000 millones de pesetas. Esto está en la prehistoria de esa parte del debate presupuestario al que tuvieron oportunidad de asistir, junto con nuestros compañeros, los señores Diputados aquí presentes, e igualmente yo mismo, y que determinó una autorización al Gobierno para elevar hasta 60.000 millones de pesetas la cuantía de la dotación del Banco de Crédito Local de España en el ejercicio de 1979; dotación que, ciertamente, en la medida en que el Gobierno vaya haciendo uso de esa autorización de las Cortes, cubriéndola por el sistema que sea, hay que subrayar la importancia que tiene que una gran parte, más de la mitad de esa dotación, corresponderá su ejecución al segundo semestre, puesto que el anterior ya ha sido agotado.

Pero todos éstos son los distintos parches que se han ido poniendo a una situación cuya explicación a mí me parece que es bastante lógica, y a cuyas razones históricas, económicas y sociológicas he apuntado, lo cual pone de relieve, una vez más, que es el conjunto de las finanzas municipales el que hay que cimentar sobre un pie sólido, si se quiere que, efectivamente, haya una autonomía municipal. A esto se dirigirá consiguientemente la Ley de Régimen Local en la sección dedicada a las haciendas locales, pero, al mismo tiempo, estamos estudiando la posibilidad de alguna fórmula normativa de la jerarquía procedente que contribuya a un primer intento de consolidación de las haciendas municipales,

pero siempre sobre la base de que esto representará, efectivamente, un incremento de impuestos. Entendemos que es precisa la elevación de la base impositiva de la contribución urbana, de la contribución rústica, de los rendimientos de las profesiones liberales y posteriormente, también, del impuesto de radicación.

Es evidente que todo incremento de impuestos es enormemente impopular, pero no hay otro sistema para ofrecer mejores servicios, y no digo ya mejores servicios, sino servicios suficientes al nivel del decoro a que nuestras poblaciones tienen derecho, sin unas mayores exacciones tributarias en este punto del régimen local. Yo creo que aquí corresponderá a los partidos políticos, a los Ayuntamientos y al Gobierno mismo una operación general de explicación de estas insuficiencias, que son insuficiencias estructurales, y que no se pueden, digamos, remediar, porque además, podían dar lugar a situaciones de agravio comparativo justificado y a situaciones de injusticia, sólo mediante una redistribución de los Presupuestos del Estado, incrementando la participación de los entes locales en los impuestos generales del Estado.

No quiero decir con esto que no contemplemos, no ya para este ejercicio de 1979, puesto que se ha aprobado ya la Ley de Presupuestos en esta Cámara, sino de una forma estructural, un incremento de la participación porcentual de las corporaciones locales en los impuestos generales del Estado, pero son los impuestos de las corporaciones locales los primeros que, de alguna manera, se tienen que poner al día.

Ya por lo que hace a la Administración Local, y quizá he sido más largo de lo que yo mismo me había propuesto, no voy a extenderme en más puntos, sino en aquellas otras cuestiones que los señores Diputados tengan a bien plantearme.

El otro aspecto de nuestro Ministerio es el de las comunidades autónomas y, a los efectos de la realidad actual, los entes preautonómicos. En este punto, digamos, nos encontramos, como los señores Diputados saben, ante una situación derivada de un proceso de preautonomía que se desarrolla, paralelamente a la formulación de la Constitución, a lo largo de una serie de Reales Decretos-Leyes, que van creando distintos entes preautonómicos.

El proceso ha sido enormemente diverso. Cada uno de estos Reales Decretos-Leyes, que

dan lugar a la creación de un ente preautonómico, ha sido objeto de distintas negociaciones, fue tramitado a través de diferentes negociaciones políticas tan heterogéneas, como corresponde a la diversa realidad de los pueblos de España, y con ánimo de llegar, por la vía de los hechos, a una cierta aproximación, a un principio de aproximación, a lo que será la realidad de las comunidades autónomas que luego, más tarde, quedaron definidas en la Constitución. Ahora mismo hay un número de entes preautonómicos de naturaleza más o menos homogénea, de estructura diversa y de una situación muy diferente en cuanto al punto capital que les da vida y les da sentido, que es el de la adquisición o de la asunción, por parte de estos entes preautonómicos, de determinadas competencias políticas, que les son transferidas por el Estado.

En nuestro criterio no estamos, y no debemos estar, ante un problema de descentralización administrativa, sino que tenemos que enfrentarnos en la realización de este proceso de transferencias, como más tarde en la consolidación del sistema de las comunidades autónomas, con un problema real, con una temática real de una distribución del poder político.

La situación actual yo la describiría, de una manera digamos sistemática en general, de la siguiente forma:

Hay regímenes de preautonomía que han recibido unas ciertas transferencias que están en proceso de ejecución, yo diría que, en general, de una manera insatisfactoria para los que las ejecutan y también insatisfactoria para nosotros, pero yo diría que sin grave deterioro del servicio público, puesto que el simple hecho de la proximidad del poder decisorio al administrado compensa de algunas deficiencias que no son achacables a esos órganos —yo me atrevería a decir que, incluso, tampoco son achacables a la Administración Central del Estado—; éste es el caso de la Generalidad de Cataluña, del Consejo General del País Vasco y, posteriormente también, pero con un cierto alcance, del Consejo General del País Valenciano, de la Diputación General de Aragón y de la Junta de Galicia.

Otros entes preautonómicos tienen próximo el proceso de ejecución, y esto dará lugar a un cierto debate político y a un proceso de reajuste que en estos días estamos tratando de solventar como son algunos de los mencionados en relación con otros campos de com

petencias y también la Junta de Andalucía.

Hay otras comunidades, otros regímenes preautonómicos en los que las Comisiones de transferencias han realizado algunos trabajos, pero están solamente a nivel previo, e, incluso, por último, hay otros en los que las Comisiones mixtas de transferencias ni siquiera se han constituido.

Hemos iniciado en estos últimos días, como habrán visto —incluso son protagonistas algunos señores Diputados—, un proceso acelerado de contactos con los órganos responsables de los regímenes preautonómicos, a partir de la renovación que éstos experimentaron, que tenía su fecha límite en el día 10 de junio, y como consecuencia de esos contactos hemos iniciado, de una manera progresiva, una agilización y una aceleración del proceso de trabajo de las Comisiones mixtas de transferencias. Ayer se reunió, con unos resultados que yo considero, junto con mis colaboradores, en principio satisfactorios, la Comisión mixta de transferencias entre la Administración del Estado y el Consejo General interinsular de las islas Baleares, en la que se aprobaron los mandatos de negociación, se constituyeron los grupos de trabajo y esperamos que, en plazo de un mes, una nueva reunión de esta Comisión mixta de transferencias dé lugar a que se logren acuerdos efectivos sobre transferencias en determinadas materias al Consejo General de las islas Baleares. De esta manera nos proponemos, antes de la finalización del mes de julio, haber puesto en plena actividad de funcionamiento a los grupos de trabajo, llamados grupos horizontales, de todas las Comisiones mixtas de transferencias, con objeto de que en el próximo mes pueda realizarse una ampliación sustancial del proceso de transferencia de competencia a los regímenes preautonómicos. Por una parte se acuerdan los decretos por los que se hace la transferencia de facultades y, por otra parte, se elaboran —esto resulta mucho más enojoso y más insatisfactorio, tanto para los que hacen las transferencias como para los que las reciben— los anexos correspondientes de los medios de trabajo, y se entiende que son medios económicos y de los funcionarios que van a atender esos servicios.

En este punto hay que decir que nos encontramos con la escasez de los recursos. Hablo de escasez de los recursos humanos, económicos y presupuestarios. Efectivamente, por mencionar

unos datos, a título indicativo, en materia de agricultura, en la provincia de Barcelona han pasado a prestar sus servicios en la Generalidad treinta y seis funcionarios, pero hay diecinueve puestos vacantes; en Tarragona, cincuenta y un funcionarios, con veinticinco puestos vacantes, etc. En materia, por ejemplo, de urbanismo, cuarenta y siete personas y catorce puestos vacantes, en el caso de Barcelona. Por señalar otros casos, en transportes y comunicaciones, en la provincia de Guipúzcoa, nueve funcionarios, con cuatro puestos vacantes y, en comercio y turismo, en Vizcaya, veinticinco funcionarios y dos puestos vacantes. En conjunto, están adoleciendo, aparentemente, las transferencias, desde el punto de vista de la adscripción de funcionarios, de un déficit, pero hay que saber que ese déficit existía también en la Administración Central, y que, además, al no transferirse la totalidad de las funciones de algunas de las delegaciones ministeriales, sino parte de ellas, ha de producirse un reajuste en los trabajos de los funcionarios en cuestión.

En punto a locales y a dotaciones económicas tampoco las situaciones, de hecho, son satisfactorias. Estamos intentando poner algunos medios, que comprenderán un inventario de locales o bienes del Estado, en el ámbito geográfico de los regímenes preautonómicos, con objeto de estudiar su posible adscripción. Para hacer un resumen general de los medios transferidos ofrecería la siguiente estadística: los puestos de trabajo transferidos a las Comunidades Autónomas han sido dos mil ciento once, de los cuales hay cuatrocientos veinticinco que están vacantes; las dotaciones presupuestarias son señaladamente cortas: setenta millones de pesetas; los bienes del Estado cuyo uso ha sido cedido a los entes preautonómicos comprenden setecientas hectáreas, y las superficies de locales del Estado, independientemente de los que han aportado las Diputaciones, están en este momento en la cifra de treinta y dos mil metros cuadrados.

Se trata de unos elementos, yo diría que cortos, de un proceso que está solamente incoado, y ante el que nadie, y menos que nadie el Ministerio al que está encomendada la gestión de todas estas operaciones de transferencia, puede sentirse satisfecho. Pero nosotros, por medio de esta aceleración de nuestras relaciones con las Comisiones de transferencias, cuyo punto de arranque tenía que ser, necesariamente, el 10 de junio,

queremos agilizar este proceso, de modo que nos enfrentemos con la recta final del año 1979 y con el principio de 1980 con unos regímenes de autonomía de los que podamos decir con cierta firmeza, con cierta convicción —yo diría que con una convicción profunda, puesto que se trata de un proceso que por sí mismo es irreversible—, que están sentando las bases estructurales de algo que ha de venir desde un campo más estrictamente político que el administrativo y técnico en que nosotros nos movemos: del campo de las autonomías del Estado español, que está llamado a realizar este Parlamento, de acuerdo con los mandatos constitucionales.

Me he extendido más de lo que yo mismo habría previsto, pero con esto quizá he tenido oportunidad de ofrecer algunos elementos de información que pueden servir no sólo para la ilustración de SS. SS., sino para la formación concreta —sobre la base de estos datos y otros muchos que estaré en condiciones de ofrecer— de los criterios políticos que los señores Diputados de los distintos Grupos Parlamentarios puedan mantener sobre estos problemas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Tenemos ahora veinte minutos que vamos a dividir en dos partes si les parece a SS. SS. En los diez primeros minutos la Mesa será receptora de las preguntas que formulen SS. SS. o los portavoces, según se acuerde por los diferentes Grupos Parlamentarios. En los otros diez minutos la Mesa con el Ministro y su equipo ordenará las preguntas para proceder luego a hacer las oportunas contestaciones sobre esas mismas preguntas o sobre otro mecanismo que podamos también plantear a partir de esos veinte minutos que daremos de receso. Se suspenderá la sesión por veinte minutos; en los diez primeros minutos recibiremos las preguntas.

El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor Presidente, nosotros quisiéramos que no se rompiera la costumbre que ha existido siempre en estas sesiones informativas de que las preguntas se hiciesen oralmente sin necesidad de pasarlas primeramente por escrito, si bien sí que hubiese esta interrupción de quince o veinte minutos para que los Grupos Parlamentarios preparasen las preguntas. Creemos que el sistema de presentar las preguntas previamente por escrito rompe un poco la viveza del propio debate y, por consi-

guiente, nosotros proponemos a la Mesa que se adopte el sistema clásico o consuetudinario en esta Cámara en las Comisiones.

El señor PRESIDENTE: En principio creo que no hay excesivo inconveniente en el tema, pero pienso que ésa no es una costumbre que haya marcado una regla absoluta, porque tengo entendido que ha habido otras Comisiones en las cuales sí se han formulado preguntas por escrito. Esto sólo tiene por objeto intentar racionalizar las respuestas, hacer una respuesta en bloque y conseguir una economía de tiempo.

De todas formas pregunto al Ministro si tiene algún inconveniente en que hagamos un planteamiento abierto como es el que propone el señor Sanjuán, aunque yo sí que sería partidario, por esto de la economía de tiempo, de una respuesta más racionalizada y en bloque, porque es más eficaz, ya que luego abriremos un turno de réplica y de participación abierta en el cual sí habrá esa viveza que el Diputado señor Sanjuán quiere.

El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Si se abre posteriormente un turno de rectificación, con posibilidad de preguntas, de acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Podemos conceder media hora.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Fontán Pérez): Quiero decir, con permiso del Presidente, que por mi parte como Ministro vale todo, puesto que no considero que ninguna pregunta sea en principio ilegítima; además como suelo decir a los periodistas que ninguna pregunta es indiscreta, lo que puede ser indiscreta es la respuesta, y ésa corre de mi cuenta.

De todas maneras, lo que sí quisiera saber es cuáles son las normas del debate; si las preguntas se desarrollan en un tiempo pasado y si fuera posible que hubiera una agrupación de preguntas por parte de los Grupos Parlamentarios porque con eso ganaríamos tiempo. De todas formas no tengo otra cosa que hacer que atender la sesión informativa de la Comisión durante el tiempo que ésta estime procedente.

El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, podríamos buscar una fórmula ecléctica: aquellos

grupos que quieran presentar preguntas por escrito, que lo hagan en los quince primeros minutos de estos veinte o treinta que se concedan. Esto sería, señor Sanjuan, una solución ecléctica.

¿Les parece bien media hora? (*Asentimiento.*) Así pues, será media hora. Durante el primer cuarto de hora, los señores Diputados y grupos parlamentarios que quieran formular preguntas por escrito, que las formulen. Esto no quita para que después se puedan dar en todo momento las contestaciones oportunas en un debate abierto, de acuerdo con la espontaneidad de la misma dinámica del acto.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Como recuerdan ustedes, hemos establecido un sistema mixto, en el sentido de que ha habido una serie de preguntas que se han formulado por escrito. Hemos sido absolutamente flexibles en cuanto al plazo, dado que ahora mismo, ya sentados los componentes de la Mesa, hemos recibido algunas. También hemos dicho que eso no era óbice para que se pudieran formular algunas preguntas oralmente y en este momento. Para poder establecer una tasa de tiempo y mantenernos dentro de unas coordenadas normales también en este tiempo, yo preguntaría a SS.SS. quiénes desean hacer uso de la palabra para acogerse a ese tipo de intervención oral. No quiere decir que los que hayan formulado preguntas por escrito no puedan luego, en el turno que demos a los Grupos Parlamentarios, hacer alguna réplica o alguna matización. Ahora no tienen que levantar la mano los que han formulado preguntas por escrito, sino los que no habiéndolas presentado quieran, sin embargo, defender alguna pregunta oralmente.

¿Quiénes de SS.SS. desean intervenir? (*Pausa.*) Hay cuatro señores Diputados del Grupo Socialista del Congreso.

El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Quisiera preguntar a la Presidencia qué tiempo se va a determinar para preguntas orales.

El señor PRESIDENTE: Esto quería decir. Yo propondría que se reparta el tiempo el Grupo Socialista hasta un tiempo máximo de 30 minutos. Estas cuatro intervenciones tendrán un

tiempo máximo, todas ellas, de media hora. Hay que distribuir este tiempo entre los cuatro interpelantes.

Entiendo que si alguna de las preguntas que se va a formular ahora oralmente pudiera, de alguna manera, coincidir con las que hubieran formulado otros Diputados por escrito, conviene oír primero las preguntas orales por si hubiera ocasión de globalizar las respuestas.

Tiene la palabra el señor Diputado que ustedes deseen del Grupo Socialista.

El señor DIPUTADO: La pregunta concreta al señor Ministro es sobre el tema de las transferencias. Son dos preguntas muy breves sobre este tema. El señor Ministro se ha referido con cierta amplitud al tema de las Comisiones mixtas y dentro de ello, el señor Ministro piensa que en la nueva etapa que nos ha señalado aquí es posible llegar a unos calendarios concretos en las negociaciones y, especialmente, en donde hay ya mandatos negociados de transferencias, como es el caso de la Xunta de Galicia.

En segundo lugar, en relación a esos criterios de ese mandato transferido, las prioridades de las transferencias negociadas, señor Ministro, ¿quién las establece? ¿la propia Comisión Mixta? ¿El órgano de gobierno preautonómico? ¿La representación de la Comisión? ¿La Administración Central?

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Fontán Pérez): Primer tema: Las transferencias de las Comisiones Mixtas, una nueva etapa, calendarios concretos.

Para las Comisiones Mixtas hemos establecido un calendario según el cual en los próximos meses de junio y julio se reunirán dichas Comisiones. Probablemente la Comisión Mixta de la Xunta de Galicia y la Administración Central se reunirán, faltando la conformidad de la otra parte, posiblemente el día 25 de Junio, el próximo lunes. Será la Comisión de Galicia u otra que esté en un estadio de desarrollo semejante.

Los calendarios respecto de aquellas materias de transferencia sobre las que hay mandato de negociación y que sean materias que están recogidas en el artículo 148 de la Constitución, no se van a rebasar, en ningún caso, en el estadio preautonómico; es decir, las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas cuando estén constituidas; depende del orden

concreto con que se vayan desarrollando las transferencias y de los acuerdos a que se vaya llegando entre las representaciones del ente preautonómico en la Comisión mixta y los Departamentos ministeriales. Hasta ahora, el sistema que se ha seguido, lo saben los señores Diputados, es que han operado, como modelo inicial para la articulación de los mandatos de negociación y de las sucesivas transferencias, los acuerdos a que se había llegado en el caso de la Generalidad de Cataluña y se han producido diversas aplicaciones a este esquema.

Yo diría que el calendario concreto, en el caso de la Xunta de Galicia, sería el 2 de julio, que es cuando le serán transferidas algunas competencias. Las fechas para las siguientes, si se obtiene acuerdo entre los grupos de trabajo y los centros de Administración Central, podrán hacerse antes de final de año; es decir, todas aquellas en que haya mandato de negociación y estén conformes.

Las prioridades en el criterio que nosotros queremos aplicar con las nuevas Comisiones mixtas vendrán determinadas por el planteamiento que se haga en el seno de la Comisión mixta. Como en él están presentes por una u otra fórmula de delegación los Departamentos interesados en las transferencias, creemos que el calendario intencional —independientemente del detalle de fechas—, saldrá de las reuniones de la Comisión mixta como así ha ocurrido en el caso de la reunión de la Comisión mixta con el Consejo Interinsular de Baleares.

Entendemos que los representantes del ente preautonómico en la Comisión mixta, tienen mandato suficiente del órgano de gobierno que es, en definitiva, el que los ha designado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Navarro Estevan.

El señor NAVARRO ESTEVAN: Señor Ministro, solamente dos preguntas.

El señor Ministro se ha referido en su exposición a los principios generales con que se piensa abordar esa problemática de agrupación de municipios, voluntaria, forzosa, etc., pero no ha hecho mención a la posibilidad en caso realizarla, de segregación de términos municipales, incluso de determinación de nueva capitalidad en aquellos municipios cuyo desarrollo así lo aconseje. Ambas cuestiones están planteando problemas graves en algunas provincias españolas.

De otra parte, quería también preguntarle si el Gobierno piensa o no mantener los términos restrictivos, incluso regresivos, del Decreto 2.704, de 27 de octubre de 1978, por el que se regula el procedimiento de ejecución de transferencias de las Diputaciones a los órganos preautonómicos. Digo regresivo y restrictivo en cuanto que algunos reales decretos-leyes de constitución de entes preautonómicos determinaban, entre las facultades de los mismos, la de integrar y coordinar funciones y actuaciones de las Diputaciones, en cuanto afectaran a los intereses generales de la región o nacionalidad correspondiente. Sin embargo, el Decreto de referencia determina un procedimiento de ejecución que supone un paso atrás respecto a estas funciones importantísimas de los entes preautonómicos.

Concretamente, ¿piensa el Gobierno mantener los términos de este Decreto que interpreta de manera restrictiva, incluso atenta contra la letra y el espíritu de esos decretos de constitución de entes preautonómicos?

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Fontán Pérez): Primera pregunta, segregación de municipios y nueva capitalidad de municipios.

El tema de la segregación está previsto en paralelo con el tema de la agrupación de municipios. En muchos de estos casos —aparte de la intervención que, probablemente, en la ley tendrá un carácter preceptivo de la Diputación correspondiente, también seguirá siendo preceptivo el dictamen previo del Consejo de Estado. Pero tanto un proceso como otro ha de ser contemplado por la ley, aunque no sé exactamente en este momento en cuál de sus capítulos, y de ahí, mi respuesta claramente sería sí.

Respecto del famoso Decreto 2.704, al que ya he tenido que hacer una amplia referencia en la otra Cámara, como sabe el señor Navarro Estevan, entendemos que es un Decreto de desarrollo en el que se establecen las modalidades para la ejecución de esas funciones que, por ejemplo, en el caso de la Junta de Andalucía están en el artículo 8.º b) del Real Decreto-ley. Entendemos que tanto en ese Real Decreto-ley, como en el Decreto de desarrollo, que es el 832/78, se habla de que se ha de constituir una Comisión integrada por miembros de la Junta y representantes de las Diputaciones.

Entendemos que en la nueva Junta, que es

igual a la anterior, los representantes de las Diputaciones tienen que constituir esa Comisión para la transferencia de funciones o facultades de las Corporaciones Locales, de las Diputaciones provinciales a la Junta. Ese Decreto habla, en el apartado 2 del artículo 4.º, de propuestas y acuerdos de transferencias en los que se pide que se determinen los medios personales y materiales de las Diputaciones provinciales afectadas por la transferencia, que podrán en su caso pasar a depender funcionalmente de la Junta.

El Real Decreto de octubre introduce un trámite del Consejo de Ministros de aprobación y ejecución de esas propuestas y acuerdos de transferencia, que puedan adoptar las Diputaciones provinciales y la Junta.

Creo que en la legislación actual ese trámite ha de existir con objeto de que las atribuciones de medios personales y de medios materiales estén basados en una norma de suficiente rango legal como para hacerla efectiva. Lo que sí puedo añadir es que el espíritu con que se van a abordar los acuerdos entre las Diputaciones provinciales y la Junta para efectuar esas transferencias necesitan, con la legislación actual una conformidad con suficiente rango normativo, los cuales serán contemplados por el Gobierno y por este Ministerio con la máxima elasticidad, puesto que no hay ninguna razón para que si las dos partes están de acuerdo, venga un tercero, que simplemente tendría que sancionar y hacer posible esa transferencia, a interferirse en ella.

El señor PRESIDENTE: Señor Bono Martínez, entiende la Presidencia que puede formular sus preguntas desde la mesa.

El señor BONO MARTINEZ (don José): Yo querría preguntar al señor Ministro sobre un tema que preocupa especialmente al Grupo Socialista, que se refiere al régimen de tutela, fiscalización y suspensión de acuerdos de las Corporaciones locales por parte de los Gobernadores Civiles. Nosotros entendemos —y aquí creo que coincidimos con la exposición que ha hecho el señor Ministro— que esta facultad de suspensión de acuerdos por parte de los Gobernadores está en franca contradicción con los artículos 140 y 141 de la Constitución, que establecen la autonomía de estos entes, y hoy el señor Ministro hablaba de que es un principio informador de la nueva ley, según el Gobierno, el autogobierno de

las Corporaciones locales. Sin embargo, el uso de estas facultades de suspensión de acuerdos por parte de los Gobernadores se está convirtiendo en un verdadero azote para las Corporaciones que no son del criterio gubernamental. El uso es eso, el abuso podría llevarnos a un verdadero estado de excepción dentro de las Corporaciones locales. Es cierto que, después de la exposición del señor Ministro, algunas preguntas que yo habría de hacer no tendrían ya mucho sentido porque están contestadas. Sin embargo, hay Gobernadores civiles que no mantienen el mismo criterio del señor Ministro. En ese sentido baste como botón de muestra el caso del Gobernador Civil de Albacete, que lo expongo para argumentar las preguntas posteriores.

En la Diputación Provincial de Albacete, con Presidente socialista, se han celebrado cuatro Plenos, de los cuales el Gobernador Civil ha suspendido tres. Conviene poner de manifiesto que el pleno que no ha suspendido era uno de reparto de presidencias de Comisión en que se concedió al partido gubernamental más representaciones de las que por la aritmética de los votos hubiese tenido derecho. No acaba aquí de alguna manera el criterio del Gobernador, sino que suspende los acuerdos y en franca contradicción con el artículo 118 de la Ley de Jurisdicción contenciosa no envía su resolución a la Audiencia Territorial, sino que la envía facilitando el recurso de alzada ante el Ministro de Administración Territorial, cosa que nos tranquiliza, dado el criterio del señor Ministro con respecto a la tutela y el autogobierno de las Corporaciones locales. Y aquí podría decirse, como señala el Gobernador en sus resoluciones, que se trata de informes que recibe de la Abogacía del Estado.

Quiero también poner de manifiesto que el señor Abogado del Estado en ejercicio es también Senador gubernamental y, de alguna manera, no sería una explicación muy clara. En este sentido querría hacer al señor Ministro tres preguntas concretas. La primera es si tiene conocimiento o alguna estadística de si se ha hecho algo en el Departamento acerca de cuántas suspensiones de acuerdos de Corporaciones locales se han producido antes y cuántas desde el 3 de abril de 1979. La segunda, es qué criterio tiene el Ministerio con respecto a los recursos planteados por las Corporaciones locales a los que los Gobernadores civiles han suspendido sus acuerdos. De-

searía saber cuál es el criterio del Ministerio respecto a la resolución de estos recursos y no concretamente en el tema de Albacete, sino en general. Y, tercero, si se contempla la posibilidad en la ley que está elaborando el Ministerio, para su posterior remisión a esta Cámara, de suprimir la tutela, según nos ha dicho, por parte de los Gobernadores civiles; y si es intención del Gobierno y, por tanto, ese proyecto de ley lo plasmaría, de transferir esa facultad fiscalizadora a algún otro órgano de la Administración.

El señor **MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL** (Fontán Pérez): Supongo que el Gobernador Civil de Albacete, por muchas cosas que haya suspendido, no habrá suspendido los Plenos, sino los acuerdos.

El señor **BONO MARTINEZ** (don José): Los acuerdos, sí.

El señor **MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL** (Fontán Pérez): Entonces, respecto de la suspensión de acuerdos por parte de una autoridad ajena al Municipio, habría que decir lo siguiente:

Empiezo por uno de los comentarios que ha hecho el señor Bono, cuando ha dicho que de mi exposición deducía que desaparecían las facultades de suspensión de acuerdos por parte de los Gobernadores Civiles. Yo no he dicho eso, ni me atrevería a decirlo en una materia tan concreta. Lo que sí he dicho es que hay unos avanzados proyectos de adelantarnos a la ley en una agilización y supresión de medidas de fiscalización, intervención y tutela, pero no he especificado cuáles son en concreto. Lo que sí advierto es que son muy numerosas.

En segundo lugar, respecto de estos puntos, hay dos clases de acuerdos de las Corporaciones locales entre los que están siendo, en algún caso, objeto de discusión o de suspensión por parte de los Gobernadores Civiles: unos son acuerdos de las Corporaciones locales en materias de su competencia, y éstos tienen un determinado tratamiento; otros son acuerdos de las Corporaciones locales, que llamaríamos declarativos, en materias que no son de su competencia y que tienen una función meramente digamos declarativa, de señalar la posición mayoritaria de la Corporación local en relación con un problema de carácter nacional, de carácter territorial o, si se quiere, de carácter político.

Yo diría que, respecto de los primeros tipos de acuerdos, las decisiones gubernativas de suspensión de que tenemos noticias son muy pocas. Adelanto que no tengo estadística, que podríamos elaborarla para satisfacer, no digo la legítima curiosidad, sino el legítimo afán de saber del diputado que me interroga. No tengo estadística, pero tengo la fundada impresión, por los papeles que he visto y las informaciones que tengo de la Dirección General y de la Subsecretaría, que son muy pocas. En cambio, las suspensiones en algunos territorios de lo que llamaríamos acuerdos declarativos, son más numerosas.

El criterio ante los recursos por parte del Ministerio será el de la máxima agilidad, teniendo en cuenta que en todo caso, siempre cabe el recurso contencioso-administrativo, y será el del respeto de la legalidad vigente mientras no la sustituyamos por otra más adecuada.

En relación con las suspensiones de acuerdos meramente declarativos, no hemos recibido hasta el momento recursos en cuantía y variedad suficientes para poder decir que tenemos un criterio. Tampoco sé exactamente en qué consiste la suspensión, cuáles son los efectos de la suspensión de un acuerdo de estos que el Pleno Municipal llamaba meramente declarativos. En algunos casos puede ser un acuerdo ilegal, y en este caso sí tendríamos alguna intervención si efectivamente fuera ilegal, en el caso de que no se hubiera hecho la advertencia de ilegalidad por parte de los funcionarios a quienes corresponda.

En definitiva, al final diría que, con respecto a la tutela que los Gobernadores Civiles puedan tener sobre los acuerdos de las Corporaciones locales, la última palabra en la ley la tendrá el Parlamento.

En las transferencias de materias de Interior que se han hecho a algunos entes preautonómicos, estas competencias están delegadas a los correspondientes entes preautonómicos. Yo recibí en su día el anuncio del Consejero de Interior de uno de estos entes preautonómicos, que no era precisamente del Partido del Gobierno, diciéndome que iba a suspender una serie de acuerdos, de estos que llamaríamos declarativos y otros. Por otra parte, no tengo constatación de que así lo hiciera en el periodo de su mandato.

Creo que algunos de estos acuerdos forman parte de una controversia, una legítima controversia política en una sociedad democrática, controversia política que deberá realizarse por

medio de los canales y de las tribunas adecuadas, que en algunos casos puede que no sea el Pleno de la Corporación Municipal.

El señor PRESIDENTE: El señor Diputado tiene la palabra para rectificaciones. Le ruego que sea breve.

El señor BONO MARTINEZ (don José): Seré muy breve, señor Presidente. Lo único que quería manifestar al señor Ministro y a la Comisión es que los acuerdos a los que yo hacía referencia no son acuerdos declarativos de carácter nacional, sino acuerdos de la competencia de los propios entes. Por otra parte, la controversia que debe darse (y que no la veo legítima y justa, aparte de que es necesaria) es entre las propias personas que componen el ente, porque, de otro modo, si el autogobierno de las Corporaciones Locales de alguna manera se deja con esta fisura de la fiscalización por parte de los Gobernadores Civiles en primer término, y del recurso de alzada ante el Ministro en segundo lugar, ello podría llevar a la población a una cierta desconfianza, porque bastaría estar en el Gobierno, haber ganado las elecciones legislativas, para que las elecciones municipales no tuviesen una gran importancia.

A un Ayuntamiento que no lleve el criterio del Gobierno, se le suspenden sus acuerdos y se hace ineficaz su gestión, aunque luego los Tribunales, al cabo de un año, den su sentencia favorable.

En este aspecto, me ha agradado más la exposición primera del señor Ministro, en el sentido de que el autogobierno y la autonomía de los Municipios reconocida en la Constitución iba a pasar necesariamente por quitar a los Gobernadores Civiles, en ese proyecto de ley, la facultad fiscalizadora de la que algunos hacen tan generoso uso contra Diputaciones y Municipios que no son del criterio gubernamental. Nada más.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Fontán Pérez): Lamento mucho que lo que más le gustase de mi exposición al señor Bono fuese una cosa que yo no había dicho explícitamente.

Respecto del tema, no tengo prácticamente nada más que añadir. Cuando los acuerdos afectan a materias de la competencia del ente cuya autonomía y cuyo autogobierno han de presidir

o inspirar la Ley de Régimen Local, yo me atrevo a garantizar que el Ministerio no tendrá una actitud de partido. A muchos de los alcaldes o presidentes de Diputación de diversos partidos políticos distintos del mío, con quienes he tenido la oportunidad de hablar y a quienes he recibido, les he dicho que en el Ministerio, igual que en la Dirección General, los alcaldes y los presidentes de las Diputaciones no tienen color político, puesto que los intereses públicos que tenemos que cuidar son los mismos y superiores.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fajardo Spínola.

El señor FAJARDO SPINOLA: Señoras y señores Diputados, señor Ministro, yo quería formularle varias preguntas, todas ellas en relación con la Administración Local. En primer lugar voy a referirme a algunas partes de la intervención que S. S. ha tenido en relación con el tema de la nueva Ley de Régimen Local, pues pienso que ése ha sido, principalmente, el tema al que se ha referido el señor Ministro en su exposición.

Primeramente quiero preguntarle —porque ha hecho una ligera referencia al tema, pero lo considero de gran importancia y me gustaría saber la orientación del Ministerio en este momento, en que se está trabajando en posibles anteproyectos de Ley de Régimen Local— cuál es el criterio sobre el tema de la capacidad normativa de las Corporaciones Locales. Me explico: querría conocer si efectivamente va a haber un auténtico ámbito de autonomía normativa, de capacidad reglamentaria para las Corporaciones Locales, sin ninguna interferencia de otras instancias del Estado, otros entes u organismos públicos, y si efectivamente ese ámbito va a suponer un corte efectivo y grande con la situación actual, no tratándose sólo de la autorregulación de los reglamentos de régimen interior, sino que afecta también a la capacidad de desarrollo de normas superiores, en lo que respecta a su aplicación en el término municipal.

La segunda pregunta se refiere también a la Ley de Régimen Local, y está en relación con su último Libro, según lo colocaba, o manifestaba que se colocaría, el señor Ministro, es decir, el de las Haciendas Locales. El señor Ministro ha hecho referencia a la importancia de los impuestos propios dentro del sistema de financiación de estas Haciendas Locales, y yo me pregunto si esa

interpretación es una auténtica interpretación de quienes vayan a redactar y presentar, en su día, el proyecto de ley al Consejo de Ministros, en el sentido de que la principal fuente de financiación de los municipios vaya a ser la imposición propia, descargla imposición del Estado en beneficio de imposición de las Corporaciones Locales. Si vamos a pasar efectivamente a un modelo como el que se aplica en algunos países, o en bastantes países europeos, en el sentido de que la imposición local, en relación con la imposición del Estado, está en una proporción de 75 a 25 o de 70 a 30, y no de 91 a 9, o menos incluso, como se encuentra hoy en nuestro país.

La tercera pregunta es sobre un tema al que creo no se ha referido el señor Ministro, también de la Ley de Régimen Local: el tema de las competencias. Naturalmente no es ésta la ocasión (y llevaría mucho tiempo) de pedir al señor Ministro que nos hiciera un listado o nos enumerara los distintos listados que pudiera tener sobre la mesa, de competencias de los distintos entes locales. Simplemente preguntar por el sistema que piensa que se elegirá, por el que se inclina, de fijación y determinación de las competencias locales; si se va a emplear el sistema de listas cerradas, si va a seguir existiendo la ambigüedad de las competencias compartidas Estado-Corporaciones Locales y, en definitiva, si va a existir un ámbito propio, exclusivo y excluyente, de competencias municipales, y líneas generales sobre la amplitud de ese ámbito de competencias.

La cuarta pregunta, también sobre la Ley de Régimen Local, está referida al Archipiélago Canario. Soy diputado canario y quiero preguntar acerca de unas manifestaciones que hizo el señor Ministro en su exposición (en el sentido de que las Mancomunidades Interinsulares Canarias se mantendrían en la Ley de Régimen Local), si considera el señor Ministro, en una precisión mayor, que puede hacer ahora, que éste es más bien un tema del futuro Estatuto de autonomía de Canarias.

Y ahora voy a pasar a formular algunas preguntas no referidas a la Ley de Régimen Local, sino a otros aspectos de la política del Departamento.

En primer lugar, criterio del Ministerio sobre la situación actual y líneas generales de posible modificación de las comisiones y las subcomisiones de colaboración del Estado con las Corpora-

ciones Locales; criterios generales, composición, líneas o filosofía general del Ministerio sobre la política de colaboración (si hay que ponerla entre comillas o no, esa política de colaboración) con las Corporaciones Locales.

En segundo lugar la pregunta hace referencia a una Institución concreta, hoy dependiente claramente del Ministerio de Administración Territorial por una disposición de reciente aparición, y que es el Instituto de Estudios de Administración Local. Hay quien mantiene la tesis -no es el momento de exponerla, pero pensamos que puede tener bastantes argumentos para defenderla- de que el Instituto de Administración Local en su historia ha contado no solamente con la aportación económica de los distintos Ayuntamientos y demás Corporaciones Locales del país, que con su cuota han contribuido a su sostenimiento, junto con una aportación del Estado, sino que además la propia filosofía del Instituto (si bien en un régimen de unidad de poder y coordinación de funciones, como se bautizaba el anterior) sin embargo tenía un cierto aspecto, una cierta tendencia a la agrupación y dependencia más o menos clara al servicio de las Corporaciones Locales.

Naturalmente no pongo la situación anterior como ejemplo, sino que lo que planteo es si hacia el futuro considera el Ministerio que sería oportuno desvincular mucho más el Instituto de las directrices del Ministerio y convertirlo en un auténtico Instituto dependiente de la Administración Local autónoma, es decir, dependiente de las Corporaciones Locales, de todos los Ayuntamientos y Diputaciones, y regentado o dirigido por alguna representación de las mismas, sin que el Estado tuviera una interferencia en el ejercicio de las funciones que son propias de esta Institución.

También nos interesa saber si este Instituto tiene un plan de trabajo, cuál es en líneas generales, si hay director ya, o si se le piensa nombrar en breve.

En tercer lugar nos interesa (porque S. S. sabe que nos angustia el tema, tanto a Alcaldes y Concejales de nuestro partido, como también a los de otros partidos políticos) conocer la postura del Ministerio sobre los sueldos e indemnizaciones de los Concejales y Alcaldes. Este es un tema que ya ha estado en la tribuna de esta Casa recientemente, pero el Diputado que ahora habla no se ha sentido satisfecho con pronuncia-

mientos directos y concretos del Ministerio respecto del tema. Aquí no voy a hablar de la importancia del tema, sino simplemente formular la pregunta sobre el tema de las indemnizaciones y sueldos de los Alcaldes y Concejales en el sentido siguiente: Primero, si el Ministerio va a tomar alguna decisión en el sentido de mandar al «Boletín Oficial del Estado» alguna norma jurídica de determinado rango que vaya a regular la materia; segundo, cuándo la va a enviar, antes de qué fecha la va a enviar. El cómo y el cuándo comprenderán todos los señores Diputados de esta Comisión que es importantísimo para quien hoy se dedica desde las ocho y media de la mañana a las ocho y media de la noche, por lo menos, a su función de Alcalde, porque hasta ahora vivía de un trabajo remunerado que, naturalmente, ha tenido que abandonar.

La situación es angustiosa y a ella tenemos que responder todos, y el primero el Ministerio de Administración Territorial, que es al que hoy preguntamos qué va a hacer ante esto, porque aquí no cabe esconder la cabeza en la arena, sino tomar una decisión, incluso antes de la Ley de Régimen Local, porque es cuestión de días, de semanas, el que este tema se arregle en todo el país.

Otra pregunta está referida a la existencia, y continuidad en su existencia, de la llamada Asociación de Alcaldes y ex-Alcaldes. Que yo sepa, ex-Alcaldes no hay todavía sino de la etapa anterior, pero supongo que si surge algún ex-Alcalde de los elegidos el 19 de abril, posiblemente pueda participar en esta extraña Asociación, que no sabemos si tiene un carácter oficial o no (primera pregunta), que no sabemos si es simplemente el ejercicio, por unos señores que la integran, del libre derecho que reconoce la Constitución a asociarse, y que, en consecuencia, no sabemos si tiene o no carácter exclusivo. En definitiva, como se trata de una Institución de la situación anterior y formada desde iniciativas que protagonizó la vida local en la última etapa de la situación anterior, nos interesa conocer un poco cuál es la situación actual y cuál es la posición del Ministerio al respecto.

Me interesa también preguntar al Ministro sobre el tema de la función pública local. En primer lugar, si la función pública local está previsto por el Ministerio que vaya a ser objeto de una reforma coordinada con la general, con la del Estatuto de la Función Pública, y cuáles podrían

ser esas líneas generales. También en la función pública local, cuáles son las líneas generales de la política del Ministerio en cuanto a administración de los cuerpos actuales, si va a haber aumentos de plantillas y si efectivamente se va a facilitar de alguna manera la movilidad horizontal de los funcionarios de las Corporaciones Locales. Finalmente, si en esta reforma van a poder intervenir los Sindicatos de funcionarios, y cuál es la solución que se le va a dar, por vía normativa, a la grave crisis que atraviesa hoy una Institución oscura para el pueblo español, porque poco se sabe de ella, y también para muchos de los funcionarios que la integran, como es la MUNPAL, la Mutuality de la Administración Local.

Nos interesa también conocer algo sobre el tema gravísimo de la situación financiera de las Corporaciones Locales, a la que el Ministro se ha referido; cuál es el criterio del Ministerio y del Gobierno en relación con la preparación de los Presupuestos Generales del Estado para 1980, acerca de la asunción por éstos de la cuota financiera de las Corporaciones Locales.

Y, por último, preguntar al señor Ministro si se han iniciado ya por el Ministerio trabajos en orden a evaluar la Deuda municipal, pues todos sabemos que no sabemos cuál es la cuantía de esa terrible Deuda municipal.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fajardo. Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Fontán Pérez): Voy a ver si consigo brevemente contestar al señor Fajardo, aunque sin darle satisfacción, pues estoy seguro que se declarará insatisfecho en algunas de mis respuestas, y en muchos de los casos incluso objetivamente.

El señor FAJARDO SPINOLA: No sea tan pesimista.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Fontán Pérez): Ello porque no puedo, quizás, responder a todas sus preguntas.

En primer lugar, si en la nueva Ley de Régimen Local la capacidad normativa de las Corporaciones Locales va a ir más allá de los Reglamentos —supongo que se entiende también Orde-

nanzas, etc.—, y si no se va a ir, si no he entendido mal, a dictar normas de aplicación, en el territorio de su competencia, de lo que pudiéramos llamar la legislación general.

En principio, yo creo que la legislación general del Estado, igual que la legislación general de las Comunidades Autónomas habrá de ser aplicada en los ámbitos de su competencia, en los territorios a que afecte y por las personas que resulten afectadas en sus propios términos, no en los términos que deriven, que se desprendan de una especie de legislación delegada que tuvieran las Corporaciones Locales.

Es evidente que hay materias, como puede ser la ordenación del territorio, urbanismo, etc., en donde la capacidad normativa de las Corporaciones Locales será mucho más amplia, dentro de unos parámetros que vendrán determinados por la legislación general del Estado. En este sentido, si se entiende que se va a producir una especie de capacidad normativa que convierta a las Corporaciones Locales en algo así como una especie de Cámara legislativa en el ámbito de su territorio, yo diría —no sé lo que va a decir la ley, dependerá de lo que diga el Parlamento— que eso no va a venir en el proyecto de ley.

En relación con las haciendas locales, impuestos propios y la participación de impuestos del Estado, yo no sé exactamente si la proporción 91-9 que ha enunciado el señor Fajardo es exacta, pero creo que estamos dentro de ese orden. Evidentemente, no vamos a llegar a la proporción 75-25, que por otra parte se da —como el señor Fajardo, especialista en el tema, sabe quizá mejor que yo— en muy pocos casos. Yo diría, por ponernos dentro de unas aspiraciones asequibles, que estaríamos con tendencia a llegar a 85-15, que es una situación bastante asequible dentro de lo que pudiéramos llamar las clases medias de los Estados de nuestra propia órbita cultural, histórica y geográfica.

No hay que engañarse, no hay que pensar que los impuestos propios vayan a constituir de tal manera la fuente de financiación del capítulo de ingresos que descarte —es más, yo diría que en algunos casos supere— la participación en los impuestos indirectos del Estado. El señor Fajardo en una enmienda, si no me equivoco, a la Ley de Presupuestos, planteaba unas subidas del 4 por ciento, de cuatro puntos en la participación de las Corporaciones en los impuestos generales del Estado. Es decir, que subiría del 3 al 7 por cien-

to. Eso calculamos que representaría, aproximadamente, 24.000 millones de pesetas, sin modificar las cuantías de los impuestos.

Nosotros aspiramos a un incremento más modesto y aspiramos a que ese incremento más modesto esté reflejado en la Ley de Presupuestos del año 1980. No sé si lo conseguiremos en el seno del Gobierno y si después obtendremos del Parlamento que esta aspiración porcentual, más modesta que la planteada por el señor Fajardo, se lleve a la realidad.

Las competencias locales no pueden ser excluyentes ni exclusivas recíprocamente con las de las Comunidades Autónomas y con las del Estado. Son unos mismos los territorios y son unos mismos los ciudadanos sujetos a esas competencias. Las competencias siempre, en la práctica, tienen que ser unas competencias concurrentes. Hay disposiciones de carácter general en las que corresponde un nivel de aplicación o de ejecución a la Corporación Local y hay otras en las que corresponde, digamos, un más amplio nivel normativo.

Yo diría que las Corporaciones Locales, que queremos que sean un instrumento ágil en el aparato del Estado y una parte de este mismo Estado, no pueden, o no deben, a mi modo de ver, convertirse en una especie de cuello de botella que a los ciudadanos todo tenga que llegar por la vía de las decisiones de las Corporaciones Locales. Sería prolijo enumerar aquí la infinidad de aspectos de la vida ciudadana que están sometidos a estas competencias compartidas. Por otra parte, por lo que sí hemos de velar es por la vigencia efectiva del principio de igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos, que está plasmado en la Constitución, independientemente de cuál sea el núcleo urbano en que estén desarrollando su vida.

Respecto del Archipiélago Canario, yo he mencionado las Mancomunidades Insulares, las Mancomunidades de Cabildos, porque es una realidad que está ahí. Ya sabe el señor Fajardo mejor que yo que los Cabildos son más importantes desde muchos puntos de vista que las Mancomunidades. Lo son desde el punto de vista administrativo, lo son desde el punto de vista financiero y, a partir de las elecciones locales, lo son también desde el punto de vista político. A veces, desde la Península se tiene la idea de que Mancomunidades equivale a Diputaciones Provinciales. Conociendo un poco —y creo conocer-

lo- las Islas y la estructura político-administrativa de ellas, yo diría que los Cabildos, se parecen más a las Diputaciones que a las Mancomunidades.

Desde luego nosotros en el proyecto de ley no vamos a sacralizar las Mancomunidades, de tal manera que su posible mantenimiento en el proyecto de ley naturalmente tendrá la elasticidad necesaria para que el Estatuto que adopten las Islas Canarias no esté condicionado por la existencia inamovible de unas Mancomunidades. Será en todo caso el Estatuto, además, una norma aprobada por ley orgánica, una norma de rango superior a la de esta Ley de Régimen Local, a la que yo atribuyo una gran importancia por el hecho de estar, por razones de oficio, medido en ella, pero que no está calificada como ley orgánica, ni tiene la rigidez de las leyes orgánicas en nuestro ordenamiento constitucional.

Criterios sobre la situación actual y líneas de posible modificación de los entes de colaboración o cooperación con las Corporaciones Locales, que existen en las distintas organizaciones, y distintas estructuras provinciales. Yo diría que sobre la situación actual nosotros tenemos una actitud de cierta insatisfacción, y en relación con las líneas de posible modificación, serán las de una mayor y más activa presencia y responsabilidad por parte de las Corporaciones Locales. Creemos que ahí tiene un papel predominante a desempeñar, un papel central a desempeñar la Diputación Provincial, o el órgano equivalente en otras estructuras que no sean las Diputaciones de Régimen Común.

El Instituto de Estudios de Administración Local es, efectivamente, un órgano autónomo «sui generis», porque aparece funcionando como tal órgano autónomo vinculado al Ministerio de Administración Territorial, como antes al Ministerio del Interior, en cuyos presupuestos, todavía los del Interior —porque incluso en este Presupuesto del año 1979 el Ministerio de Administración Territorial no existe, cosa que nos plantea bastantes problemas de muy diverso orden—, aparece como un órgano autónomo «sui generis»; es una institución que tiene sus orígenes, como saben muy bien SS. SS., en una organización de tipo corporativo.

En relación con el Instituto de Estudios de la Administración Local, hay preparado un proyecto de reforma de sus órganos directivos, en el que se otorga una representación cualifica-

da, y yo diría que muy importante (en este momento no sabría decir si mayor o menor, porque se están estudiando diversas formas) a los representantes de las Corporaciones Locales.

Hasta cierto punto, esto existe ya en el Consejo del Instituto con las antiguas Corporaciones Locales, pero realmente no ha tenido una efectividad; es decir, el Instituto de Estudios de Administración Local tiene un director, aunque sea un director en funciones, y este puesto está acumulado al de Director de la Escuela de Administración Local, que tendrá un director separado del otro puesto relativamente pronto, y al decir pronto quiero decir pronto.

¿Hay un plan de trabajo? Efectivamente, hay un plan de trabajo que guarda relación con las Corporaciones Locales, que guarda relación con los funcionarios; tanto las oposiciones y concursos de funcionarios como otros diversos concursos permiten el otorgamiento de los diplomas correspondientes a los funcionarios. También —como S. S. sabe muy bien— hay un plan de trabajo en relación con las nuevas Corporaciones Locales, en contacto con los partidos políticos que tienen representación municipal, en el sentido de los cursos de formación u orientación de Concejales (si no lo saben SS. SS. es que no funcionan bien ciertos conductos; si esto es así, ya daré la información), sobre el que se ha elaborado un anteproyecto de programa, en el que han tenido audiencia personas que creíamos que representaban a partidos políticos dentro de un espectro relativamente amplio, en el que estaba el partido del señor Fajardo. En fin, en todo caso, si hay algo que no funciona, trataremos de remediarlo.

Respecto a los sueldos o retribuciones de Concejales, Alcaldes, otros miembros de las Diputaciones y Corporaciones, esta Cámara ha recibido una propuesta, que estaba dentro de la proposición de ley presentada por el Partido Comunista, y posteriormente se ha recibido también en esta Cámara, tomándose buena nota de ello, la propuesta implicada en la enmienda sostenida por el señor Fajardo.

En la Mesa de trabajo tenemos otras propuestas, que no son coincidentes, procedentes de los Presidentes —al decir Presidentes me refiero a Alcaldes o Presidentes de Diputación— de varias Corporaciones importantes, y alguna de carácter menor.

Creo que la norma jurídica que trata de hacer

una síntesis razonable (probablemente insatisfactoria como todas y cada una de las propuestas, como todo intento de síntesis), la norma jurídica concreta está en estudio en los Departamentos afectados, que no es solamente el de Administración Local, puesto que, por razones obvias de coordinación de Gobierno, hay otros Departamentos que deben tener algo que decir, como los que cuidan de los aspectos generales de la función pública, si bien no se trata de funcionarios, a efectos de que no se produzcan distorsiones en el sistema de retribuciones, incluso, en este sentido, el propio Ministerio de Hacienda. ¿Que cuándo se va a enviar al «Boletín Oficial»? Yo diría que en cuanto esté aprobada por el Consejo de Ministros, cosa que, con un poco de suerte y de comprensión de la urgencia del problema, podría ser muy pronto, pero no puedo dar una fecha respecto de un acuerdo que yo planteo al Consejo de Ministros.

La Asociación de Alcaldes y ex-Alcaldes, no tiene carácter oficial ni exclusivo. Según las noticias que yo tengo, se trata de una Asociación acogida al famoso régimen de la Ley de Asociaciones del año 1964, con la que yo no he tenido ningún contacto y que tampoco se considera vinculada a la Administración Local como tal, puesto que no ha considerado procedente establecer contactos con el Ministro.

Creo que esto respondió históricamente a la aspiración a tener algún tipo de asociación que permitiera cierto tipo de contactos y de relaciones internacionales, que podrían ser importantes desde el punto de vista funcional y que no dejan tampoco de haber tenido quizá algunos aspectos turísticos nada desdeñables. Esa asociación, por ejemplo, recibió aquí oficialmente al Presidente de la Asociación de Alcaldes de Francia, siendo yo Presidente del Senado. Yo fui quien tuvo contactos con el mencionado Presidente, porque se trataba del señor Poher, que en aquel momento era mi homólogo en el Parlamento francés.

Yo diría que básicamente la función pública local está regulada en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Local. No vamos a esperar al Estatuto de la Función Pública, aunque sí vamos a procurar que los criterios que informen los aspectos normativos de la función pública local no se contradigan con los que vayan a inspirar el Estatuto de la Función Pública.

El aumento de plantillas en los cuerpos actuales, dentro de la prudencia con que hay que pro-

ceder en esto, representa siempre incremento de gastos, una cierta expansión. Ahora mismo, en estos próximos meses se van a cubrir varios miles de puestos de Secretarios de Ayuntamiento.

No sólo la movilidad horizontal, sino también la vertical, es decir, el paso de unos escalones a otros de los Cuerpos después de cierto período de ejercicio de la función anterior, está contemplada en los estudios que se están haciendo actualmente para el proyecto de Ley de Régimen Local.

Los Sindicatos de funcionarios tendrán, eso sí, un tratamiento paralelo al que tengan los Sindicatos de funcionarios en la Administración General del Estado.

La MUNPAL es uno de nuestros dramas, una de nuestras pesadillas. Al 30 de mayo de 1979 las Corporaciones Locales debían a la MUNPAL 9.823.868.932 pesetas exactamente. Estas Corporaciones tenían un crédito de la MUNPAL que reduce el saldo a favor de ésta, al 20 de mayo de 1979, en 9.574 millones de pesetas. Esto no está repartido por igual entre los 8.041 municipios españoles. Los mayores deudores de la MUNPAL son el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona; lógicamente, los Ayuntamientos de las grandes ciudades.

Recientemente se ha percibido, como consecuencia de las primeras aportaciones de los presupuestos de liquidación de deudas de los Ayuntamientos, una cierta recuperación de una parte no suficientemente importante de las deudas de la MUNPAL. Hemos actualizado, al año 1979, las pensiones y vamos a tener serios problemas de tesorería. La MUNPAL y nosotros, por solidaridad ministerial, vamos a tener serios problemas de tesorería para algunos de los compromisos que se tienen con los pensionistas en este mismo verano. Esperamos que una agilización de aportaciones parciales de las Corporaciones Locales nos permita ir afrontando estos problemas.

Hay unos atrasos por diferencias de actualización de pensiones correspondientes a los años 1974, 1975 y 1976; atrasos que la MUNPAL debe a los pensionistas —doy las cifras con toda su crudeza— de más de 6.000 millones de pesetas. Sobre este tema hay anunciada una interpelación en la Cámara del Diputado señor Fraga, que está inquieto —inquietud que compartimos todos nosotros— respecto de cuál va a ser la suerte de esas diferencias de actualización de pensio-

nes que fueron acordadas por el Ministerio del Interior en un determinado momento histórico en el que no se midieron, probablemente, las fuerzas con que se iba a poder hacer frente al pago de esos atrasos. Nosotros esperamos que no haya déficit en el mes de julio y estamos haciendo esfuerzos por poder asegurar el pago de las pensiones correspondientes si no a agosto, por lo menos a las de septiembre, que nos producen inquietud.

Sobre el Presupuesto de 1980, el señor Fajardo hablaba de la cuota financiera —ya me hago cargo de lo que quiere decir el señor Fajardo—, es decir, que si, de la misma manera que en 1979 hay 7.000 millones para atender a las anualidades y amortizaciones de estos presupuestos extraordinarios de liquidaciones de deudas, cantidad que es algo insuficiente, porque, según nuestros cálculos, el total será de 9.000 millones y algo más, en los presupuestos del año 1980, yo diría que a nivel de propuesta de elaboración de presupuestos, se contempla una cantidad con este destino; si después eso va a estar definitivamente en la Ley de Presupuestos, yo ya no puedo garantizarlo. La cifra que nosotros prevemos para anualidades y amortizaciones del año 1980 por este concepto sería algo mayor que la de 1979. En fin, tenemos las cifras, pero no vamos a cargar con ellas la cabeza de los señores Diputados.

Respecto de la evaluación de la deuda municipal, yo diría que sí, que está evaluada; que tenemos unas reservas en cuestión de detalles, entendiendo por deuda el total del endeudamiento municipal de España, pero tenemos algunas imprecisiones de detalle que se están recabando a través de los Ayuntamientos y de sus interventores para tener la cifra. El endeudamiento global no es sólo con el Banco Exterior de España, con el Banco de Crédito Local, sino con otros tipos de endeudamiento; por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid tiene unos títulos de deuda en circulación de 8.500 millones de pesetas, y el Ayuntamiento de Barcelona tiene también otra deuda pública. El endeudamiento global, repito, de los municipios yo diría que no es alarmante, pero sí pueden ser alarmantes las cuantías de algunas de las amortizaciones inmediatas, sobre todo en unos años como 1979 y 1980, en que las amortizaciones han de verse incrementadas como consecuencia de la moratoria del año 1978. Esta moratoria no se distribuye a lo largo

del año. El endeudamiento, en gran medida, alcanza a gran parte de las operaciones de crédito a veinte años. Por tanto, digamos que el patrimonio de las Corporaciones locales es suficiente.

Otra cosa es la agilidad que puede tener el Banco de Crédito Local cuando una gran parte de sus operaciones de créditos con los Ayuntamientos han ido a estos presupuestos de liquidación de deuda y, por lo tanto, han quedado enormemente reducidas las posibilidades de ir a presupuestos de inversión, que es para los que, en principio, está destinado el Banco de Crédito Local.

Pero diríamos que hasta el conjunto de deudas de las Corporaciones Locales, que son puro déficit, estaba a diciembre de 1979 en 58.000 millones de pesetas, de los cuales, como digo, 23.000 habían sido ya atendidos en forma de crédito, 7.000 han sido atendidos en forma de liquidación y el resto entiendo que, con una distribución a lo largo de unos cuantos años, representa algo que es perfectamente absorbible.

El endeudamiento total de las Corporaciones municipales, que comprende todos los presupuestos de inversión, los presupuestos de urbanismo, etc., alcanza, en el conjunto de los Ayuntamientos con población superior a 100.000 habitantes, en relación con sus operaciones con el Banco de Crédito Local de España, la cifra de 148.422 millones de pesetas, la mayor parte de los cuales, quitando estos últimos 23.000 millones, que son de una operación especial, son operaciones que circulan normalmente y que permiten sus amortizaciones, pagos de intereses, etc., y la repercusión de todos estos costos sobre las operaciones que realizan los Ayuntamientos permite un normal funcionamiento de la entidad bancaria que, como digo, sólo está afectada en estos momentos por rigideces de tesorería que esperamos sean aliviadas con la elevación hasta 60.000 millones de pesetas del tope de dotación que podrían recibir en la Ley de Presupuestos de este año.

En respuesta a la pregunta escrita del Grupo Socialista del Congreso sobre si la Ley de Régimen Local va a ser un texto articulado o una ley de bases, creo que puedo decir que va a ser un texto articulado, pero de legislación básica, en el sentido de que no va a ser un reglamento, que no va a ser este monstruo de centenares de artículos que tiene la Ley de Régimen Local actual, puesto que hay muchos preceptos que están inútil-

mente repetidos, y ya que por vía de remisión se puede aplicar la legislación general, no es preciso un régimen especial de expropiación forzosa en el plano municipal.

¿Tanto en uno como en otro caso, cabrá su desarrollo por las Comunidades Autónomas? En la medida en que los Estatutos de Autonomía otorguen a las Comunidades Autónomas funciones que ahora mismo tiene la Administración del Estado. En el apartado 1, párrafo 2.º, del artículo 148 de la Constitución se dice que «las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias...» en «las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local». Es como una pescadilla que se muerde la cola, y al final acabamos en la Ley de Régimen Local. Yo diría que la Ley de Régimen Local va a ser amplia en el sentido de las transferencias a las Comunidades Autónomas, preocupados únicamente por mantener el principio constitucional de la igualdad jurídica de ciudadanos y corporaciones.

¿Las medidas previas a la Ley de Régimen Local sobre Haciendas locales vendrán como proyecto a la Cámara o serán un decreto? Si es un decreto, no vienen previamente a la Cámara. Yo creo que sería deseable que no tuvieran que venir previamente a la Cámara, lo cual no es obstáculo ni lo será para que partidos políticos que tienen una responsabilidad importante y corporaciones a cuyo frente están miembros de esos partidos políticos que tienen una responsabilidad tan importante en esta función de Estado que es el Régimen Local, tengan su palabra que decir; y algo de esto de alguna manera se ha empezado a hablar después de la reunión de Alcaldes de Valencia.

¿Qué sistema se seguirá para delimitar la competencia de los entes locales en relación con las Comunidades Autónomas y con el Estado? En relación con las Comunidades Autónomas, los estatutos, puesto que la Comunidad Autónoma y los estatutos son dos magnitudes que van juntas. En relación con el Estado, la Ley de Régimen Local, en la medida que acertemos a interpretar de una manera satisfactoria el principio de la autonomía.

Calendario reglamentario previsto por ese Ministerio para los próximos meses, con enume-

ración de las materias que van a ser reguladas. Yo diría, para tranquilidad de los señores Diputados, que no vamos a hacer ningún reglamento en los próximos meses. Vamos a hacer la adecuación de la normativa del Instituto de Estudios de Administración Local, igual que hemos hecho la adecuación de la normativa de la Corporación Metropolitana de Barcelona. Es decir, antes de la Ley de Régimen Local no tomaremos ninguna medida que pueda dar lugar a situaciones irreversibles, aunque nos veremos obligados a tomar todas aquellas que la vida diaria nos vaya exigiendo.

El Grupo Parlamentario Comunista, sobre la necesidad de una ley urgente de haciendas locales. Será la Ley de Haciendas Locales, en relación con la Ley de financiación de las Comunidades Autónomas, de próxima presentación en esta Cámara, una de las partes de la Ley de Régimen Local. No se va a formar una comisión interministerial para preparar el anteproyecto; el anteproyecto se está preparando por equipos técnicos del Ministerio de Administración Territorial y progresivamente será sometido a consulta con los equipos técnicos de otros Departamentos ministeriales. Algunos de sus capítulos han sido ya sometidos a consulta de Departamentos ministeriales.

¿Se reunirá esa Comisión con la Secretaría permanente de la reunión de Alcaldes de Valencia de 11 de junio? Primero, yo diría que no va a haber Comisión; por tanto, no se va a reunir. En segundo lugar, yo recibo en este momento la noticia de que hay una Secretaría permanente de la reunión de Alcaldes de Valencia de 11 de junio. Creo que he hablado con la mayor parte de los Alcaldes presentes en aquella reunión, pero no me han dicho que se haya constituido un órgano permanente, no digo que no se haya constituido.

Fondo de Compensación interterritorial. ¿Existen criterios por parte del Gobierno para elaborar este proyecto? Hay un calendario: la Ley sobre financiación de las Comunidades Autónomas y Fondo de Compensación Interterritorial.

Sé que se ha planteado un problema de competencia entre las dos Cámaras, entre el Congreso y el Senado sobre este proyecto de ley. Yo, que soy celoso defensor de los privilegios del Senado, creo que el proyecto viene aquí; que las funciones específicas que señala la Constitución al Senado se refieren a la aplicación y distribu-

ción del Fondo de Acción Interterritorial. ¿Puede exponer los criterios el señor Ministro? Creo que los va a exponer muy pronto y con mayor competencia sobre el tema el Ministro de Hacienda, en la Comisión correspondiente.

Teniendo en cuenta la necesidad de la celebración de referéndum, si hay ley de referéndum.

Efectivamente, para el mes de septiembre de 1979, el Gobierno, en su calendario de desarrollo constitucional, anuncia el envío de una Ley sobre las diversas modalidades de referéndum. Se calcula que la fecha es oportuna para que la Ley, tramitada por vía normal o, si fuera preciso, por trámite de urgencia, sirva para la realización de los sucesivos referéndum.

Retribuciones de Alcaldes y Concejales. Creo haber dicho algo al respecto.

Excedencias especiales. Los funcionarios que han sido Concejales debieran poder acogerse a la excedencia especial. ¿Se pueden acoger a la excedencia especial?

Por el momento actual, los Alcaldes y Presidentes de las Diputaciones de capitales de provincia (por supuesto, todos los Presidentes de Diputaciones son de capitales de provincia) y de municipios de más de cien mil habitantes. Nos parece muy difícil que puedan acogerse al régimen de excedencia especial la totalidad de los Concejales electos que sean funcionarios, con el número de Concejales que han sido elegidos.

Se están haciendo, efectivamente —puesto que esta cuestión había sido ya planteada—, estudios estadísticos de la incidencia que esto representaría, que podría ser una gran distorsión en el sistema de la función pública.

Traslados con respecto a los elegidos. Debiera legislar algo en el sentido de impedir su traslado a otras circunscripciones, tanto con respecto a la empresa pública, la privada o el funcionariado. ¿Qué se va a hacer en este sentido?

No sé si el representante del Grupo Parlamentario Comunista estaba pensando en el mismo caso que yo conozco por informe de un Diputado de su partido. Diríamos que sobre las relaciones en el seno de la empresa privada, ahí habrá que estar a lo que determine el Estatuto del Trabajador. Me parece que puede ser un lugar adecuado para la previsión de estos supuestos, tanto en la empresa pública como en la privada. En lo que respecta al funcionariado, el traslado de funcionarios no suele ser forzoso.

Sobre el tema de la excedencia especial ya he hablado.

Tengo otras preguntas del Diputado señor Barrera. Dado que no puede razonablemente esperarse que la nueva Ley de Administración Local en proyecto entre en vigor en breve plazo, ¿no cree el señor Ministro que sería necesario rebo-car urgentemente toda una serie de decretos que, innecesariamente y contra el espíritu y la letra de la Constitución, limitan la autonomía de los municipios?

En esta línea está el decreto de supresión de mecanismos de control, fiscalización y tutela; en esta línea hay otro decreto en preparación sobre personal, y, por otra parte, un poco más avanzado, el proyecto de estudio de la Ley de Régimen Local. No querríamos incurrir en contradicciones superfluas entre nuestra acción y el proyecto.

¿Qué estado legal se piensa dar (dice el señor Maciá Alavedra) al Diario Oficial de la Generalidad?

Esta es una cuestión sobre la que el señor Alavedra, igual que yo, o quizá mejor que yo, conoce todos los antecedentes de idas y venidas y el problema que esto plantea. Están en consideración los problemas técnicos que plantea el carácter de disposiciones generales para posible aplicación en todo el territorio nacional —pienso, por ejemplo en los jueces—, de las disposiciones que se publiquen en los distintos boletines o diarios oficiales de las futuras Comunidades Autónomas. Hay estudios y consultas con la Generalidad de Cataluña, algunas propuestas que he debido seleccionar, disposiciones que tendrían una aplicación de ámbito de todo el Estado y que habrían de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». Pero también ahí existe el riesgo de que el «Boletín Oficial del Estado», se nos convierta en un libro-diario de dudosa utilidad. Sé que el tema está en estudio, y con la mejor voluntad por parte del Gobierno, señor Alavedra, y de la Generalidad, y que hay unos ciertos contactos.

¿Qué criterios tiene el Gobierno para los traspasos de servicios a las Comunidades Autónomas? Yo diría que los Estatutos establecerán el traspaso de los servicios a las Comunidades Autónomas y estos Estatutos requerirán un proceso de aplicación que va a llevar bastante tiempo. La Comisión Mixta de Transferencias de Servicios y Funciones a la Generalidad de Cataluña no había terminado la totalidad de sus trabajos cuando fue suspendida la Generalidad en el año

1934 y yo creo que se procedió con bastante agilidad.

Hay un volumen, que tendría mucho gusto en ofrecérselo, en nombre del Instituto Nacional de Administración Local, a los miembros de la Comisión, en el que se recoge toda la documentación sobre el proceso de las transferencias, de esa experiencia histórica que tenemos delante.

Luego, en la pregunta del Grupo de Socialistas de Cataluña, firmada, me parece, por el señor Obiols, se habla de la referencia oficial del Consejo de Ministros celebrado en el mes de febrero, precedente a las elecciones legislativas, con motivo del traspaso de competencias a la Generalidad de Cataluña, en materia de agricultura, enseñanza preescolar, EGB, cultura, sanidad, urbanismo y trabajo, y aparecen unos decretos que correspondían a las propuestas formuladas por la Comisión Mixta Administración del Estado-Generalidad, en sus reuniones de 19 y 26 de septiembre. Efectivamente, esos decretos han dado lugar, digamos, a una discusión entre el Estado, la representación de la Administración Central y la Generalidad en la Comisión Mixta respecto de la interpretación de puntos concretos.

Yo diría que en materia de agricultura se pueden considerar, en el momento actual de las negociaciones que se están celebrando, que todos los acuerdos son satisfactorios, aunque hay una diferencia entre los acuerdos a que se llega a nivel de ponencia y los que constan en las actas del Pleno de la Comisión Mixta.

Hay tres puntos que se refieren a sanidad vegetal, sobre los que yo espero una respuesta satisfactoria después de la conversación que he tenido con el Ministro de Agricultura. Hay problemas en donde la representación de la Generalidad da por tomados acuerdos con la Administración del Estado y ésta no otorga su conformidad en materias de enseñanza, preescolar, EGB, cultura y sanidad. No hay acuerdo en urbanismo; y me parece que, en una medida de cierta importancia, tampoco los hay en trabajo.

Yo espero que, puesto que la Comisión de transferencias de Cataluña tiene, de hecho, unas características especiales, igual que la del Consejo General Vasco, a partir de mi próxima conversación con el Vicepresidente de la Comisión de transferencias a Cataluña, el profesor Sureda, se pueda poner el punto sobre esta cuestión.

La Generalidad, efectivamente, remitió al Go-

bierno, hace meses, una propuesta de transferencias acordadas por la Comisión Mixta Generalidad-Diputaciones. Estas transferencias son efectivamente aceptadas y asumidas por las nuevas Diputaciones y, puesto que las Diputaciones se han renovado, no habrá ningún inconveniente en que se puedan ejecutar. No se han publicado los Reales Decretos en ambos casos, eso es evidente.

El señor Obiols pregunta si es un hecho cierto que el Gobierno retrasa la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los citados Reales Decretos, y por qué motivos. En definitiva, qué sucede con este retraso.

Este retraso se produce porque —creo que ya he explicado— el texto de los Reales Decretos, según algunos de los Ponentes, representantes de la Generalidad, no reproduce los acuerdos de la Comisión de Transferencias.

A nosotros nos parece que se ajusta a los acuerdos recogidos en las actas, bien entendido que los Reales Decretos de transferencias no tienen que ser, preceptivamente, una ejecución de los acuerdos de la Comisión de Transferencias. De todas maneras, creo que se ha conseguido, en general, una fórmula pacífica. Hemos establecido contactos entre representantes de la Generalidad y los Ministerios interesados.

Este es un asunto no solamente del Gobierno —y contesto a lo que me ha preguntado el señor Obiols—, sino que es un asunto en el que yo tomé cierta iniciativa a partir de una larga conversación con el Presidente de la Generalidad, señor Tarradellas, a principios del mes de mayo, y no me atrevo a decir que hayamos desbloqueado el tema, pero sí creo que estamos próximos a desbloquearlo.

En este sentido había una propuesta nuestra, que no ha sido todavía aceptada, que sería la de la publicación parcial de los Reales Decretos; es decir, ir publicando aquellas materias en las que haya un acuerdo entre ambas partes, con sus anejos correspondientes, y dando lugar a la transferencia efectiva de los servicios.

Contesto a la pregunta del Grupo Parlamentario Socialista Vasco. Creo que, en este momento, el señor Maturana ya no está presente, no sé si decae de su pregunta, pero, en fin, resumo la pregunta. ¿Qué calendario tiene el Gobierno para proceder a la negociación en materia de cultura, sanidad y trabajo? Son proyectos de decretos paralelos a los de la Generalidad de Cata-

luña y acerca de los cuales he mantenido conversaciones con la llamada Comisión política del Consejo General Vasco, que es la que, de hecho, estaba haciendo, cuando yo me hice cargo del Ministerio, las funciones de la Comisión de transferencias, Comisión que estaba integrada por cuatro representantes de los partidos que tienen su presencia en el Consejo. Yo creo que, reconstituido el Consejo General Vasco, estableceremos contacto con la Comisión política, salvo que el nuevo Consejo acuerde, si sigue delegando en la Comisión política o si renueva la Comisión de transferencias.

¿Qué calendario tiene el Gobierno y qué métodos para llevar a cabo las transferencias citadas, y otras ya transferidas, por medios materiales y humanos, para que las competencias no se transformen en papel mojado? He señalado en mi exposición los problemas que plantean las transferencias de medios materiales y humanos y, efectivamente, nos da una idea de la escasez con que se mueve el total del conjunto de la Administración del Estado.

En nuestra intención, estas transferencias pueden realizarse sin que en ellas tenga ninguna interferencia, tanto en Cataluña como en el País Vasco, el tratamiento del problema de los Estatutos, que va por otra vía, por la vía de la Comisión Constitucional.

Respecto al proyecto del Gobierno en materia de transferencias para el Consejo General Vasco hasta la puesta en marcha del Estatuto de Autonomía, nuestra aspiración sería conseguir un acuerdo sobre estos proyectos de decretos y transferirlos inmediatamente. Como digo, se pueden seguir las negociaciones de transferencias, aunque todavía no esté aprobado, y en vigor, el Estatuto de Autonomía.

Hay otras preguntas del Grupo Socialista del Congreso y tres del señor Barrera. Política del Gobierno sobre preautonomías y, especialmente, principios que inspiran la política de transferencias. El artículo 148, 1, de la Constitución señala el ámbito en el cual se puede desarrollar la política de transferencias. Respecto a los principios que la inspiran, es el juego de la oferta y la demanda en las reuniones de las Comisiones Mixtas. Dentro de un mes estaremos en condiciones de tener sobre la mesa todas las demandas efectivas que nos planteen los actuales entes preautónomos.

Respecto a los criterios básicos de adscripción

de recursos y personal —volvemos al mismo tema—, efectivamente, nos tropezamos con una dificultad técnica que comprenderán los señores Diputados, sobre todo los que tienen experiencia de la Administración. La transferencia parcial de servicios está desarrollada por un órgano de la Administración que tiene unas competencias más amplias, y plantea una especie de regateo difícil, en el que aspiramos a convertirnos en órganos de gestión a favor del progreso de las transferencias, porque tenemos un interés político efectivo en que el régimen de preautonomías vaya haciendo un rodaje positivo. Ya he dado algunas cifras estadísticas de lo que puede suponer la transferencia de servicios en las Comunidades Autónomas.

En relación con las Diputaciones, y respecto de los acuerdos de las Comisiones Mixtas que no se han transformado en decretos, creo haber respondido en los casos más salientes.

El señor Barrera pregunta si se ha previsto algo acerca de la posibilidad de que los déficits de recursos humanos, a que se ha referido el Ministro, que constituyen una dificultad para la puesta en marcha de la autonomía, puedan ser cubiertos directamente por los entes preautónomos con sus normas y criterios propios. Esto, efectivamente, se contempla. No hay una decisión por nuestra parte, pues tendría que ser una decisión compartida. Se plantearán los problemas de los funcionarios eventuales, con lo que habrían de adquirir los entes preautónomos los compromisos que las otras administraciones adquieren, pero creo que puede ser una fórmula, y tomo nota de ella.

El vasto y conflictivo problema de los retrasos e insuficiencias de los trasposos de competencias a los entes preautónomos podría ser abordado en profundidad en un debate público a realizar urgentemente en el Pleno del Congreso. Por mi parte, si así se acordara, no tendría el menor inconveniente en acudir al Pleno con todos los datos, incluso me ofrezco, si eso se va a hacer pronto, a explicar este tema monográfico en la Comisión de Administración Territorial en la fecha que acuerden.

Señor Barrera, no se ha resuelto todavía el problema de la concesión de pensiones de jubilación a los que fueron funcionarios de la Generalidad de Cataluña durante el período de 1931/1939. Se ha hecho por la propia Generalidad una selección de peticiones y de la docu-

mentación recibida. Creo que estamos en condiciones de ofrecer muy pronto una propuesta de una Comisión Interministerial que se ocupe de problemas similares y que está en la Presidencia del Gobierno. Pero todas las peticiones y documentación, como digo, han pasado por el trámite previo del estudio en la Generalidad. Yo creo que, por nuestra parte, en cuanto que nos corresponde ser ponentes, por aquello de que era un órgano de gobierno, igual que la actual Generalidad, de carácter territorial, en un plazo muy corto, yo diría que antes de las vacaciones de verano presentaremos a la Comisión Interministerial, una propuesta de resolución.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz del Grupo Parlamentario desea hacer uso de un turno para alguna matización? *(Pausa.)* Piden la palabra los señores Barrera, Obiols, Sanjuán y Alavedra. El señor Barrera tiene la palabra.

El señor BARRERA COSTA: Yo quisiera manifestar al señor Ministro que he considerado muy interesantes todas sus manifestaciones y, sobre todo, que le agradezco, en nombre personal y de mi Grupo, que haya querido participar y ofrecernos esta sesión informativa.

Yo creo que, hablando ahora en términos generales, puesto que las cuestiones particulares han sido ya desarrolladas en las preguntas, estos temas son muy importantes. Creo que, dentro de un cierto sentimiento general de decepción que hay en el país, sobre este período de puesta en marcha de la democracia, esta decepción es particularmente relevante en el caso de las preautonomías, al menos en Cataluña, que es donde yo conozco la opinión pública, y pienso que también podría serlo, muy en breve, sobre el funcionamiento de los Municipios, si todas las trabas y tutelas no se eliminan o, por lo menos, no se aligeran de manera muy significativa. Me parece que el país tiene puestas sus esperanzas en que realmente se note, a nivel ciudadano, que las cosas han cambiado y, hasta ahora, la realidad es que se va notando muy poco.

Yo quisiera hacer notar al señor Ministro, por ejemplo, que en la documentación que ha ordenado que se nos entregase hoy, referente a los traspasos de competencias, en lo que se refiere a Cataluña hay exactamente cinco Reales Decretos que son de fechas 23 de julio de 1978 y el último de 26 de julio de 1978 y, posteriormente,

hay una Orden desarrollando un tema muy concreto. Esto quiere decir que hace casi un año que, en materia de traspasos de competencias a la Generalidad de Cataluña, no se ha avanzado lo más mínimo. Esto me parece que es verdaderamente grave y que hay un sentimiento, repito, de decepción en Cataluña a este respecto que, yo creo, en interés de todos y en interés de la buena marcha de las instituciones democráticas, sería conveniente eliminar, y se deberían tomar medidas muy urgentes para que este sentimiento desapareciese.

Además, hasta cierto punto, en Cataluña podemos tomar esto como lo que algunos llaman —y no es que yo comparta completamente este criterio— un verdadero sabotaje de la institución preautonómica. Podemos considerarlo como una prefiguración de lo que puede ser la puesta en marcha del Estatuto, y antes, para empezar la discusión del Estatuto. Es decir, yo creo que la buena voluntad, de la cual no dudo, por parte del actual Gobierno respecto de la verdadera puesta en marcha de este nuevo tipo de Estado que representa la división del poder o el que las Comunidades Autónomas puedan verdaderamente compartir el poder político, esta buena voluntad —repito— debería ponerse de manifiesto a través de una muy rápida aceleración y agilización de este proceso de traspaso de competencias, y lo mismo por lo que se refiere a los Municipios.

Hay, por ejemplo, una cuestión —yo no soy especialista en Administración Local, y en tanto que, como Diputado único de mi partido no puedo abarcar todos los problemas, conozco muy insuficientemente las cuestiones para entrar en los detalles—, pero, desde luego, hay, al menos, una cuestión que en Cataluña, por ejemplo, también produce sorpresa, y es que los Municipios no pueden decidir, sin sanción posterior por parte de la Administración, acerca, por ejemplo, de una cosa tan simple como el nombre de las calles. Parece inconcebible que la Administración tenga que ocuparse, incluso, del nombre de las calles, pasando por encima de las decisiones de los Municipios democráticos, de los Ayuntamientos que acaban de ser elegidos. Esto es simplemente un botón de muestra.

Yo creo, señor Ministro, que es muy importante que el país y los ciudadanos tengan la sensación de que las elecciones municipales no se han hecho en vano, y que, realmente, estos nue-

vos Ayuntamientos puedan actuar de acuerdo con el deseo de los que les han elegido. Yo estoy convencido de que estos nuevos Ayuntamientos —creo que hasta ahora todo lo demuestra— actuarían de manera muy responsable y tendrían en cuenta todas las limitaciones y los problemas generales del país, pero, por parte de su Ministerio, hay que darles las máximas facilidades y, aunque en la respuesta a mi pregunta me ha indicado el señor Ministro que hay dos decretos para disminuir todos los atentados contra la autonomía municipal, francamente me parece que, acaso, dos decretos son insuficientes, y yo dudo mucho que la nueva ley pueda ser puesta realmente en vigencia, con sus Reglamentos de aplicación y con su desarrollo, puesto que se tratará esencialmente de una Ley de Bases, según usted, señor Ministro, nos ha manifestado; dudo mucho que esto pueda ponerse en marcha suficientemente pronto para que la necesidad de anular todas las disposiciones contrarias a la autonomía municipal no sea una necesidad vigente, absoluta, en estos momentos.

Por lo que se refiere, y para terminar, a los funcionarios de la Generalidad de Cataluña del período 31-39, yo comprendo que se trata de un problema que, desgraciadamente, no puede resolver únicamente el señor Ministro de Administración Territorial, pero quisiera insistir en que lo que se refiere a la selección de demandas a que procedió la Generalidad, hace ya bastante tiempo que está ultimada y, realmente, por parte de las personas interesadas, muchas de las cuales son personas ya de edad avanzada y en situación económica muy precaria. Se tiene la sensación de que hay, por parte de la Administración, un verdadero deseo de acumular obstáculos, de retrasar, etc., como dicen algunos de ellos, a ver si nos morimos, y creo que esto es realmente lamentable.

Muchas gracias, señor Ministro, repito, por todas sus informaciones y por la buena voluntad que nos ha demostrado hacia todos los puntos de vista.

El señor **MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL** (Fontán Pérez): Únicamente dos palabras para decirle al señor Barrera que espero que el botón de muestra dure poco como tal, concretamente ése.

En el punto de los funcionarios de la Generalidad, agilizaremos, como digo, para ver si antes

del verano está hecha, por lo menos a nivel de la Comisión Interministerial, nuestra propuesta razonada.

Gracias por todas las palabras de cortesía que me ha dirigido y, efectivamente, estos decretos no bastan, es preciso una ley, pero, en fin, algo espero que avancemos, sobre todo en cosas como las intervenciones o fiscalizaciones que son inútiles, porque muchas veces se hacen después de los hechos.

El señor **PRESIDENTE**: El señor Alcaraz, del Grupo Parlamentario Comunista, tiene la palabra.

El señor **ALCARAZ MASATS**: Solamente tres palabras, en el sentido de aclarar por qué se hacía la pregunta con respecto a la Ley de Haciendas Locales de la forma en que se ha hecho, hablando de si se iba a constituir de inmediato una Comisión Interministerial para preparar el anteproyecto, y si esa Comisión Interministerial podría celebrar sesiones de trabajo con la Secretaría Permanente, que, según nuestras noticias, existe, de la reunión de Alcaldes en Valencia.

Se hacía en este sentido, porque en su discurso ante el Congreso el día 13 de junio, al aprobarse la enmienda 251 del Presupuesto sobre los 60.000 millones de pesetas de crédito oficial para la liquidación de deudas municipales, el señor Abril Martorell se refirió explícitamente a la necesidad de una ley urgente de Haciendas Locales en línea con la propuesta en la reunión citada de Alcaldes. Nosotros pensamos que un proyecto de ley urgente se debería remitir de inmediato al Congreso, por delante de la Ley de Bases de Régimen Local, que tendría su entrada, según el compromiso del Gobierno, antes del 15 de octubre.

Por otra parte, simplemente reconocer que la información ha sido completa y, en algunos casos, satisfactoria.

El señor **MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL** (Fontán Pérez): Yo diría que el señor Abril Martorell se refirió, a mi modo de ver y si no le interpreté yo mal, a unas medidas urgentes que sería preciso adoptar y que, efectivamente, pueden ser objeto de ley o de otro tratamiento normativo en virtud de su carácter de urgencia. Creo haber hecho una refe-

rencia suficientemente explícita, antes, en una de mis intervenciones.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Obiols, por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña.

El señor OBIOLS GERMA: Señor Ministro, yo también quería agradecer su presencia hoy, aquí, entre nosotros. Sin duda, este pequeño «maratón» al que le hemos sometido, ha ido en detrimento de la concreción en algunos puntos que deberían haberse tratado con mayor extensión y profundidad; no ha habido tiempo para ello. Yo he tenido no sólo la cortesía, sino la preocupación política de presentar mis preguntas por escrito —creo que he sido el primer Diputado en hacerlo—, tal vez temiendo lo que ha sucedido, es decir, que la problemática que yo planteaba quedara subsumida dentro de toda una serie de problemas distintos, sin duda, también muy importantes.

Pero yo quisiera decirle muy brevemente al señor Ministro dos o tres cosas. Primero, que la paciencia bíblica de la que ha hecho gala hasta ahora la población en Cataluña y las fuerzas políticas catalanas, de la que ha sido una buena manifestación, creo, la reciente intervención del señor Barrera, es un hecho positivo, pero sería un error que el Gobierno lo interpretara en el sentido de pensar que los catalanes, en la política española, vamos a hacer el papel de San José con su vara florida.

Existe una situación de paralización grave de la Generalidad provisional. Existen resistencias muy fuertes a modificar la situación, de lo que son buena muestra, creo, estos hechos, que yo he tratado de explicar, brevemente, en mi pregunta en relación con los acuerdos que la Comisión Mixta Administración Central del Estado-Generalidad tomó en la reunión de los días 19 y 26 de septiembre de 1978, es decir, hace casi un año, que fueron asumidos por el Consejo de Ministros, según referencia oficial del 20 de febrero, es decir, nueve días antes de la celebración de las elecciones del primero de marzo, hecho, creo yo, significativo desde el punto de vista político, y que, después, por razones que el señor Ministro ha mencionado y que sin duda existen en realidad, han llevado a una paralización de la publicación y, por lo tanto, de la entrada en vigencia de estos trasposos en materia de agricultura, cul-

tura, enseñanza preescolar, enseñanza general básica, sanidad, urbanismo y trabajo a la Generalidad. Creo que esto es grave, sobre todo si se añade a lo que sucede en relación con las transferencias Diputaciones catalanas-Generalidad.

Quisiéramos, en un nuevo gesto de invocación positiva al Gobierno, decirle al señor Ministro de Administración Territorial que una de dos, o se va a una activación decidida de la Comisión Mixta, a una activación decidida de la actitud del Gobierno por lo que hace referencia a los trasposos a la Generalidad, o podemos encontrarnos con una situación política absolutamente caótica a corto plazo y, en consecuencia, con un proceso que yo caracterizaría de «euskadización» de Cataluña. Muchas gracias.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Fontán Pérez): Únicamente diría que está en los propósitos del Departamento ir a esa activación a que se ha referido el señor Obiols.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sanjuán, de Socialistas del Congreso.

El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor Ministro, en primer lugar, agradecerle también su presencia hoy aquí, en este primer contacto que tomamos con el Ministerio de Administración Territorial, pero manifestar que, como ya dijo el señor Ministro cuando empezó a contestar algunas de las preguntas realizadas, no nos sentimos satisfechos, ni subjetiva ni objetivamente. No nos sentimos satisfechos por muchas de las no respuestas que el señor Ministro ha dado a múltiples cuestiones que le hemos planteado. Comprendemos perfectamente que es muy difícil, en el escaso espacio de tiempo que hemos tenido, responder con la concreción y con el rigor que nosotros deseamos, y con el que, sin duda, el señor Ministro también querría habernos contestado, a todas las cuestiones planteadas.

Pero sí tenemos que decir al señor Ministro que, si bien hemos planteado un gran número de preguntas con relación al tema de la Administración Local, hemos dejado pendientes muchas más preguntas con relación al tema de los regímenes preautonómicos y de las autonomías. Con relación a este tema concreto hemos hecho una pregunta de carácter muy general sobre qué filo-

sofía inspiraba al Gobierno en el tema de las preautonomías y de las transferencias, y que se nos haga una cita al artículo 148 de la Constitución y que se nos diga después que su filosofía es la de la oferta y la demanda para las transferencias, nos demuestra que no existe filosofía ninguna en la política del Gobierno con relación a las transferencias de competencias y a los regímenes preautonómicos. Creemos que esto es grave, y nos gustaría adherirnos a la petición que ha hecho el señor Barrera de realizar un debate en profundidad sobre el tema de los regímenes preautonómicos, para ver si logramos determinar de una vez qué es lo que se entiende por preautonomía y qué es lo que vamos a hacer con estas preautonomías que existen por ahí, parece que un poco vagando por los desiertos, puesto que se nos anuncian decretos que tardan luego meses en publicarse, transferencias que después no hay medios económicos para ponerlas en marcha, o medios personales y humanos; se nos dice que las Juntas o los diferentes entes preautonómicos van a tener facultades y posibilidades para coordinar con las Diputaciones y después nos viene un decreto del Gobierno quitando esta facultad y estas posibilidades.

Quisiera, por último, decir al señor Ministro que nos preocupa extraordinariamente, y creo que ya lo pusimos de manifiesto en la discusión de la Ley de Presupuestos, y hoy, nuevamente, lo ha puesto de manifiesto el compañero Luis Fajardo, el tema de las percepciones de los Alcaldes y Concejales. Preguntábamos al señor Ministro qué era lo que tenía previsto y cuál era la fecha. Nos ha dicho que está estudiándolo y que su fecha está, naturalmente, supeditada a que lo presente en un Consejo de Ministros. Esto es, un poco, dejarlo también en el vacío, o a «ad calendas graecas». En consecuencia, pediríamos al señor Ministro que, cuanto antes, solucionase este problema, porque todos estamos diciendo que hoy el problema de la Administración territorial, de la nueva estructuración del Estado, no sólo de las comunidades autónomas, sino del funcionamiento de las Diputaciones y de los Municipios, es un problema de Estado, y tiene que resolverse, en parte, por la dedicación de las personas que hoy están dando lo mejor de sí mismos a la resolución de unos tremendos problemas que tienen planteados los municipios, y que usted, señor Ministro, ha puesto de manifiesto. Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Maciá Alavedra.

El señor MACIA ALAVEDRA: Señor Ministro, señor Presidente, como todos sabemos, la Constitución española establece un Estado autónomo, en lugar del Estado centralista que todavía tenemos. El señor Ministro, en su exposición, ha dicho que los Estatutos de autonomía no eran de la incumbencia de su departamento en este momento, pero sí lo eran las transferencias de servicios a los entes preautonómicos, que, evidentemente, facilitan todo el proceso autonómico general. Pero, señor Ministro, como se ha dicho aquí por los Diputados que me han precedido en el uso de la palabra, la falta de criterio claro y definido sobre la política de transferencias de servicios, la lentitud, por otra parte, en la realización de dichas transferencias, con calendarios muchas veces incumplidos, la dificultad en la adscripción de medios económicos a los servicios que se traspasan, están creando en Cataluña un ambiente cada vez más tenso, de expectación y de inquietud. Si a este clima añadimos las reuniones maratonianas de las que nos informa la prensa, y que tienen lugar en la Moncloa, sobre los Estatutos de autonomía catalán y vasco, se va creando una imagen que quisiéramos que fuese errónea, de que el Gobierno desea frenar en estos momentos todo el proceso autonómico. Muchas gracias.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL (Fontán Pérez): Si me permite el señor Presidente y tienen SS. SS. dos minutos de paciencia, haría dos observaciones a lo dicho últimamente por los señores Sanjuán y Alavedra. A don Carlos Sanjuán le respondería que ha sido en dos contextos distintos donde he dicho lo del artículo 148, 1, de la Constitución, en las normas directivas de las transferencias, en el sentido de que marcan concretamente aquellos puntos en donde efectivamente se pueden hacer transferencias, puesto que son competencias que podrán ser asumidas por las comunidades autónomas. Este es el espíritu de esta política (no la filosofía, porque yo tengo otro concepto de la misma, y no me hace particularmente feliz el empleo de la palabra «filosofía», en el sentido del que tanto se abusa ahora y que procede del inglés americano), ésta es la inspiración política, junto con la voluntad de que los regi-

menes preautonómicos que tienen un «status» paraconstitucional, que no está contemplado en la Constitución, aunque sí hay referencia a ellos en varios lugares de la misma. Lo consideramos como una fórmula transitoria que sirva para el efectivo rodaje y puesta en marcha de esta nueva forma de Estado que llamamos de las autonomías, que hemos acordado los españoles y aceptado con la Constitución.

Cuando yo he hecho referencia a esta fórmula, probablemente desafortunada, de la oferta y de la demanda, me estaba refiriendo a la mecánica real con que se plantean las tareas de la Comisión de transferencias y de los grupos de trabajo. No voy a mencionar algunas cuestiones de las que no he tenido una experiencia directa, pero sí recojo de alguna manera, por la lectura de las actas y las experiencias de los funcionarios, que en algunos casos alguna delegación que hemos recibido en la Comisión de transferencias, realmente, no ha estado a la altura que era de esperar. En algunos casos se plantea como criterio qué es lo que se ha acordado con Cataluña y se dice: «Pues lo mismo».

En este momento actual, y con este espíritu, hemos empezado casi inmediatamente después del 10 de junio, en las reuniones de la Comisión Mixta de transferencias, aspirando, como se ha hecho en la primera ocasión que ha habido, a un tratamiento adecuado a la realidad del ente preautonómico en cuestión.

Con algunos de ellos no ha habido reunión porque no se ha pedido. En otros casos se ha pedido y es donde probablemente, como decía Barrera y ratificaban los Diputados Obiols y Alavedra, en estos momentos en términos objetivos la representación de la Generalidad de Cataluña estaría del lado de los acreedores y la Administración Central del lado de los deudores.

En el corto tiempo que llevamos ocupándonos de este tema, creo que hemos conseguido desbloquear parte de estos decretos y no hemos obtenido una conformidad clara por parte de la Generalidad respecto de si es procedente la publicación de los decretos y el ejercicio de las transferencias que están ya desbloqueadas, puesto que parece que ahí mismo hay dos escuelas de pensamiento y es preferible la totalidad a ir por partes. Pero estamos trabajando en ello, y yo espero mucho del contacto personal con el Profesor Su-

reda para la ordenación del tema, con quien hablé muy poco en Barcelona, pero con quien incluso tengo la base de un antiguo conocimiento y relación de compañeros, que pueden facilitar, a nivel personal, la aceleración de estos procesos.

Tomo nota de las repetidas referencias de los Diputados catalanes a este ambiente de tensión y de preocupación que recogen en Cataluña, y con el que cumplen con su deber para con los electores que les han traído a esta Cámara dando cuenta de él en la reunión de la Comisión y delante de un miembro del Gobierno que se siente comprometido a trasladar las palabras que ha oído.

Señor Presidente, señores Diputados, por mi parte gracias, muchas gracias por el interés que demuestran ustedes por unos asuntos que, por razones políticas, absorben prácticamente mi atención y toda mi dedicación en estos momentos. Les reitero mi disposición para debates, tanto en el Pleno como en la Comisión, como el que hoy se ha planteado aquí. No seré yo quien falte a la cita.

El señor PRESIDENTE: Señorías, palabras de rigor muy breves pero sinceras también.

Creo que han merecido la pena estas cuatro horas de debate, porque hablar de Administración local y de Administración territorial en su sentido autonómico es tanto como profundizar en el ámbito más vital de la democracia y en esa nueva articulación y vertebración del Estado.

Creo que hay que dar las gracias a todos los que han participado, señores Diputados, en estas tareas. Hay que dar las gracias también al señor Ministro que en todo momento ha hecho una exposición clara en la que fundamentalmente ha alentado continuamente la sinceridad. Creo que también debemos dar las gracias en este momento a las señoritas y señores taquígrafos que han resistido toda esta sesión, así como a los servicios de megafonía, y, por supuesto, a los hombres de la comunicación, porque de la información de este tema creo que resultará algo de máximo interés para treinta y seis millones de españoles.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y quince minutos de la tarde.